

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

21ª REUNIÓN

20ª SESIÓN ORDINARIA

14 de junio de 2017

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes
de junio de 2017, siendo la hora 13 y 18:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro abierta la 20ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.

Invito a la señora legisladora Marcela Tinti a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

-Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Tinti procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Antes de dar comienzo a la sesión, invito a los señores legisladores a guardar un minuto de silencio en conmemoración del fallecimiento del ex intendente de Coronel Baigorria y ex senador provincial, Víctor Pascual Bertola.

Invito a los legisladores a ponerse de pie.

-Así se hace.

-3-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-4-

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

Tiene la palabra el legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito –por su intermedio- a la legisladora Bustos que me incluya como coautor en el proyecto 22177/L/17 a referéndum de ella cuando comparezca en esta sesión.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra la legisladora Ferrando.

Sra. Ferrando.- Señor presidente: solicito que se incluya al interbloque Cambiemos como coautor del proyecto 22147/L/17, de adhesión al 99º aniversario de la Reforma Universitaria.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra el legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Señor presidente: omití pedir la inclusión del interbloque Cambiemos y del FIT como coautores del proyecto 22222/L/17, referido a la preocupación de hambre que está llevando adelante Carlos “pecas” Soriano.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Chiapello.

Sra. Chiapello.- Señor presidente: solicito la inclusión de mi bloque como coautor del proyecto 22196/L/17.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Sr. Presidente (González).- Antes de iniciar el tratamiento del Orden del Día, por Secretaría se leerán las notas 22208 y 22213/N/17, remitidas por los legisladores Fortuna y Bee Sellares solicitando prórroga de licencia.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 22208/N/17

Córdoba, 12 de junio de 2017.

Al señor Presidente de la
Legislatura de Córdoba
S. / D.

De mi consideración:

En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno, me dirijo a usted y por su digno intermedio a todo el Cuerpo legislativo, a fin de solicitarle se me otorgue prórroga de licencia sin goce de sueldo por el máximo tiempo contemplado en el Reglamento Interno a partir del vencimiento de la otorgada oportunamente.

Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludar a usted, y por intermedio suyo a mis pares legisladores con especial estima y consideración.

Francisco Fortuna
Ministro de Salud

Nota 22213/N/17

Córdoba, 12 de junio de 2017.

Al señor Presidente de la
Legislatura de Córdoba
S. / D.

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Poder Legislativo que usted preside, con el objeto de solicitarle que, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno, se me otorgue prórroga de la licencia que oportunamente se me otorgara. La prórroga es solicitada por las mismas razones e idéntico plazo que la licencia que se me acordara en su oportunidad.

Sin más, saludo a usted y a mis pares legisladores con respeto y consideración.

Javier Bee Sellares

Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de licencias que acaban de ser leídas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente, solicito que conste la abstención del bloque de Frente de Izquierda en los dos solicitudes de licencia votadas.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención solicitada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 1 del Orden del Día sea enviado al archivo.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto correspondiente al punto 1 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del punto 124 del Orden del Día.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión del punto 124 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 63, 82, 83, 115, 120, 125 al 158 y 160 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 21ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 21ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 63, 82, 83, 115, 120, 125 al 158 y 160 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 21ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 57, 85 al 88, 90 al 98, 100 al 114, 116 al 119, 121, 122, 123, 159 y 161 al 167 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 22ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 22ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 57, 85 al 88, 90 al 98, 100 al 114, 116 al 119, 121, 122, 123, 159 y 161 al 167 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 22ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 2 al 56, 58 al 62, 64 al 81, 89 y 99 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 23ª sesión ordinaria, adelantando la solicitud del bloque que represento del tratamiento sobre tablas y la correspondiente puesta en comisión de la Cámara, para el proyecto 22216/E/17 y la nota 22241/N/17.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En primero término, se pone en consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 23ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2 al 56, 58 al 62, 64 al 81, 89 y 99 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 23ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 22216/E/17 y nota 22241/N/17, con moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 14 de junio de 2017.

Al Señor Presidente de la
Legislatura de Córdoba
S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de que, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, ponga a consideración del Cuerpo el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 22216/E/17, al que se agrega la nota remitida por Mesa Provincia-Municipios apoyando este proyecto, por el que se establece el Régimen de Garantías para la Prestación Mínima de Servicios Esenciales en casos de medida de acción directa.

Lo sucedido durante la última semana con el transporte público de la Ciudad de Córdoba es demostrativo del interés y la necesidad de contar con esta herramienta.

Sin más, saludo a usted atentamente.

Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.

Sr. López (J.).- Señor presidente: venimos hoy a acompañar esta decisión política del Gobierno provincial, que es una consecuencia directa de lo vivido por los ciudadanos de Córdoba en el último conflicto de transporte, por todos conocido.

Lo primero que queremos destacar es que este proyecto de ley no vulnera ni menoscaba el derecho a huelga –consagrado por la Constitución Nacional– a entidades gremiales; antes bien, viene a reglamentar y establecer un procedimiento para regular –en el marco de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 25.877, sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2004– lo relativo a los resguardos de prestación mínima a cumplir cuando la actividad que se resiente es esencial para el desenvolvimiento normal de una ciudad.

El referido artículo 24 establece en su primer párrafo: “Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.” En los párrafos posteriores se especifica cuáles son estos servicios y se establece qué hacer en los casos en que alguna actividad no esté comprendida en el párrafo anterior.

De tal manera, lo que pretendemos es determinar procedimientos operativos...

Sr. Peressini (fuera de micrófono).- ¡Le solicito una interrupción, señor presidente!

Sr. Presidente (González).- Disculpe, legislador Julián López; el legislador Peressini le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. López (J.).- No, señor presidente; el legislador Peressini ya va a tener oportunidad de hablar.

Sr. Peressini (fuera de micrófono).- ¡Quiero que me diga cuáles son los servicios esenciales!

Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Julián López.

Sr. López (J.).- Como decía, lo que pretendemos es determinar procedimientos operativos –organización y procedimentales– para la prestación de actividades consideradas esenciales, que garanticen a la totalidad de los ciudadanos el ejercicio de los derechos constitucionales.

En cuanto a la imposición de servicios mínimos, este proyecto respeta la recomendación de la Organización Mundial del Trabajo respecto del establecimiento de un marco de acuerdo entre todas las partes involucradas, para llegar a soluciones consensuadas que respeten garantías e intereses y, en caso de no alcanzarse tal acuerdo, se asegure que dicha cuestión sea resuelta por un órgano independiente.

Por eso, este proyecto de ley establece, en sus artículos 4º, 5º y 6º, la integración, organización y funciones de la Comisión Técnica. En cuanto a su integración, se establece que estos cinco miembros –que se van a desempeñar «ad honorem» y que serán designados por este Poder Legislativo, a propuesta del Poder Ejecutivo– deben contar con antecedentes en materia de relaciones laborales, Derecho Laboral, Constitucional y Administrativo, y no podrán, asimismo, ser dependientes de ninguno de los poderes del Estado.

Esta Comisión actuará a instancias de la autoridad de aplicación para efectuar la calificación excepcional y restrictiva de servicios, con prestación mínima garantizada de

actividades no enumeradas en la presente ley, y entenderá, asimismo, en la determinación de modalidades de prestación de servicios y planteles de personal mínimo requeridos al efecto. Esta Comisión será la encargada de brindar asesoramiento a la autoridad de aplicación sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio de medidas de acción directa.

Este proyecto establece también un plazo de preaviso para que, con cinco días de anticipación y de forma fehaciente, se notifique a la autoridad de aplicación. Esto se puede realizar una vez cumplida la obligación impuesta a las partes en conflicto en los procesos de conciliación o en forma previa, y cuando haya vencido el plazo previsto por la ley vigente para regulación de los conflictos colectivos de trabajo. Ahí se deberá hacer la notificación –en las formas establecidas por el proyecto–, cuya razonabilidad se basa, principalmente, en que se trata de temas sensibles que afectan a toda la población.

Lo que pretendemos con este proyecto es dar respuesta a una demanda social ante los hechos acontecidos recientemente. Cumplimos con una demanda sin alterar ni vulnerar los procedimientos que la ley laboral establece para los conflictos en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo para dirimir reclamos laborales y, lo que es más importante, sin menoscabar el derecho a huelga reconocido y amparado por nuestra Constitución.

Señor presidente: por eso nosotros vamos a proponer aprobar el proyecto de ley con la Cámara constituida en comisión, pero con pequeñas modificaciones realizadas al proyecto enviado por el Ejecutivo, las cuales voy a enumerar. El artículo 10, en su último párrafo, quedará redactado de la siguiente manera: “serán pasible de aplicación de las sanciones previstas en la legislación vigente” y se suprime el resto de la redacción. En el caso de los artículos 14 y 15, se suprime de su título la palabra “contravención” y por una cuestión de técnica legislativa, en el proyecto figuraba el artículo 19, que pasa a ser artículo 16 y, por ende, los artículos 16, 17 y 18 pasan a ser ahora 17, 18 y 19. En el artículo 19 se suprime el último párrafo y el penúltimo queda redactado de la siguiente manera: “Igual sanción se aplicará a quienes debidamente sean requeridos para las obligaciones establecidas en el artículo 10 de la ley.”

Por estas razones, señor presidente, vamos a pedir el acompañamiento al resto de los bloques, adelantando el voto favorable de Unión por Córdoba.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Arduh.

Sr. Arduh.- Señor presidente: le pido al miembro informante que repita las modificaciones porque no teníamos conocimiento de las mismas.

Sr. Presidente (González).- Legislador López, lea como quedan redactado los artículos.

Sr. López (J).- Señor presidente: en realidad, son cambios formales. El artículo 10, en su último párrafo dice: “La decisión será notificada a las partes involucradas y, en caso de incumplimiento, los responsables serán pasibles de aplicación de las sanciones previstas en la legislación vigente”.

En los artículos 14 y 15 se elimina del título la palabra “contravenciones”; el artículo 19 establece: “El Ministerio de Trabajo de la Provincia o la autoridad que la sustituya en el futuro es la autoridad de aplicación de la presente ley”. Por una cuestión de técnica legislativa el artículo 19 pasa a ser artículo 16 y los artículos 16, 17 y 18 pasan a ser 17, 18 y 19. El artículo 19, en su último párrafo queda redactado de la siguiente manera: “Igual sanción se aplicará a quienes debidamente requeridos para la prestación de los servicios considerados esenciales por la legislación vigente, no las cumplimentara”.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Legislador Arduh, ¿está claro?

Sr. Arduh.- El artículo 18 ahora sería 19, entonces quiero saber cómo quedaría redactado.

Sr. Presidente (González).- Legislador López, léalo nuevamente.

Sr. López (J).- Señor presidente: lo voy a leer completo para que no haya confusión: “Artículo 19.- Incorpórase como artículo 68 bis, al Capítulo I, Título III, del Libro 2 de la

presente Ley 10.326, Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba, el siguiente: Artículo 68 bis: Interrupción del servicio público. Serán sancionados con hasta cinco días de trabajo comunitario, multa hasta diez unidades de multa o arresto hasta tres días los que sin incurrir en delitos contra la propiedad interrumpen, obstaculicen, alteren, afecten o suspendan la prestación del servicio público o servicios considerados esenciales. Igual sanción se aplicará a quienes debidamente requeridos para la prestación del servicio considerado esencial por la legislación vigente, no las cumplimentara.”

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Señor presidente: en los últimos días, en la ciudad de Córdoba hemos visto como un sector de la clase trabajadora enfrentó, consecuentemente, el robo salarial que los gobiernos y las empresas llevan adelante sobre las conquistas históricas de los trabajadores.

Los medios de comunicación, en una instancia, pero, centralmente los gobiernos, se han encargado de desprestigiar la lucha de la clase trabajadora porque la lucha de los choferes de la UTA representa la defensa del salario y de las conquistas obreras.

Ahora, el miembro informante viene a decir que la única respuesta que tiene el Gobierno de la Provincia ante el conflicto es el intento de liquidar el derecho a huelga, porque los legisladores –particularmente los de Unión por Córdoba- que van a votar esta ley están haciendo una canallada, están ampliando los servicios esenciales que están legislados en la Ley Nacional 25.877, en su artículo 24, y en el decreto reglamentario.

Es tal la canallada que, prácticamente, todos los servicios públicos de nuestra Provincia, por esta ley, se amplían y se transforman en servicio esencial. Y utilizan un mecanismo muy nefasto: la definición del derecho a la vida contemplado en el artículo 1. Entonces, con esta maniobra –y este es el intento del Gobierno- cualquier acción de la clase trabajadora y de los sectores populares que quiera enfrentar el ajuste y represión del Gobierno es considerada, producto de este proyecto de ley, como una violación a los derechos esenciales.

Efectivamente, el bloque mayoritario funciona a pedido del bloque Cambiemos a nivel nacional, porque esto lo intentaron ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, que es el lugar donde deben hacerlo, pero no les salió bien. Estuvieron todos los diputados por Córdoba, pero no juntaron la mayoría para modificar la Ley Nacional que legisla sobre los servicios esenciales, entonces, pegaron un tubazo y dijeron: “no nos salió ayer” y por encargo de Mestre, Cambiemos y Macri, el Gobernador Schiaretti está ordenando a todos los legisladores que realicen directamente una acción legislativa que es inconstitucional, ilegal e ilegítima, porque quieren llevarse puesto un derecho histórico de la clase trabajadora, que es el derecho a huelga.

La salud, la justicia sí son servicios esenciales, pero el transporte no lo es, y esto está mostrado en varios casos judiciales, en hechos sobre los que se ha expresado la OIT, también nosotros lo decimos. Si quieren que los servicios esenciales funcionen pongan plata del Presupuesto; la salud es un servicio esencial, entonces, garanticen el funcionamiento de los hospitales públicos que se caen a pedazos. De esta manera, cualquier cosa va a ser un servicio esencial.

Arman una comisión para que defina qué es un servicio esencial y qué no lo es. Nosotros no creemos que esa comisión sea independiente sino que está armada por el Poder Ejecutivo y va a definir qué es un servicio esencial y qué no lo es, pero, cuando lo hagan centralmente, lo único que van a intentar hacer es reventar la huelga de los trabajadores lo único que van a intentar hacer es reventar la huelga de los trabajadores. Es por eso que nosotros rechazamos este proyecto del Gobierno.

Arman esta comisión y le dan superpoderes al Ministro de Trabajo, este personaje que reconoce las “mafias” que hay con el sistema de transporte público de nuestra Provincia y no hace nada; este Ministro que vive garantizando resoluciones para los grandes empresarios e impone acuerdos que después no garantiza.

Efectivamente, le están dando superpoderes a un Ministro de Trabajo que va a ser el encargado de garantizar los servicios esenciales que una comisión dictada por el Ejecutivo disponga. ¿Y cómo lo van a hacer? Y no se quedan ahí, porque buscan la judicialización y criminalización de las protestas obreras y sociales, modificando el represivo Código de Convivencia para hacerlo más represivo, e incorporan párrafos como “cualquiera que

obstruya, limite el servicio del transporte o servicios públicos puede ser condenado a tres días de prisión”.

Ese es el objetivo del Gobierno: judicializar la protesta y meter presos a los que enfrentan sus planes de ajuste porque, efectivamente, como decíamos antes, lo que la Municipalidad, los Gobiernos provincial y nacional quieren hacer con los trabajadores de la UTA, al robarles el 11 por ciento del salario para entregarles esa plata a los grandes empresarios, lo quieren hacer con el conjunto de la clase trabajadora en nuestra Provincia y en nuestro país.

Como saben que hay resistencia a las políticas “hambreadoras” de este Gobierno, buscan aprobar este proyecto de ley que es claramente “gorila”. Son proyectos de ley patronal “hasta la manija”. Es un proyecto de ley que fue elaborado por Schiaretta, Massei y esta “escribanía de lujo” que hoy le está dando la entidad de ley, que van a reglamentar rápidamente.

Quienes defendemos el ambiente, cuando nos movilizamos vamos a cortar las calles – porque lo vamos a seguir haciendo, nos vamos a seguir movilizand- ¿y quién va a aparecer? ¿Seren o alguien de una comisión, con un papelito diciendo “están impidiendo la circulación del transporte público, marche preso y queda detenido”? ¡Caraduras! Dicen garantizar los servicios esenciales como el servicio de ambiente y desmontaron nuestra Provincia, y lo quieren seguir haciendo. ¡Son unos caraduras! ¡Buscan pintarse la cara! Buscan responder sobre la bronca que ustedes han desarrollado, porque tuvieron la política de enfrentar trabajadores con trabajadores en el conflicto con los choferes, y ahora quieren profundizar esa política.

Efectivamente, a todos los que tenemos que salir a pelear llamamos a repudiar este proyecto de ley. Y los que repudiamos el “2X1”, acá están los legisladores que estuvieron presentes, defendiendo los derechos humanos. Dicen defender los derechos humanos pero con este proyecto de ley están violándolos, porque el derecho de un trabajador a luchar es el principal derecho humano, es el derecho que se quiso llevar puesto la dictadura, el derecho a huelga que tienen los trabajadores. Y no lo permitimos. Ahora vienen a querer ustedes, el PJ cordobés, junto con Cambiemos y el macrismo, a querer llevarse puesta una conquista histórica de la clase trabajadora que ni la dictadura nos la pudo quitar. Eso es lo que realmente quieren y no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir, no acá porque somos una minoría los que nos oponemos a este proyecto de ley, porque esta Legislatura tiene una mayoría que representa a los intereses de las grandes patronales. Efectivamente, cuando la semana pasada, por ejemplo, discutimos la necesidad de aprobar un proyecto para terminar con la violencia laboral, decían: “no, no, la legislación que ordena el trabajo es de orden nacional, no podemos hacer nada”, ahora vienen a legislar sobre un derecho histórico de la clase trabajadora.

Efectivamente, vienen por el derecho del movimiento obrero que enfrenta sus planes de ajuste. pero también vienen para reglamentar todas las luchas; vienen a reglamentar la lucha de las mujeres que de a miles ganan las calles; quieren meter presos a los luchadores, en nuestro país hay 7.000 luchadores procesados por el simple hecho de luchar, y desde el Frente de Izquierda estamos en contra de la criminalización de la protesta, de la persecución, de los activistas, de los nuevos delegados que enfrentan a esa burocracia sindical que ha permitido que los trabajadores, choferes de la UTA y de los trolebuses tengan que volverse a sus casas sin la conquista definitiva, porque la única manera de enfrentar esta política del Gobierno, que es “hambreadora” y ahora persecutoria contra el movimiento obrero, es desarrollar un profundo plan de lucha, y las conducciones sindicales tienen que romper los acuerdos políticos de estrategia con el Gobierno y las grandes patronales.

Esto es una muestra de que necesitamos un paro general y un plan de lucha en esta Provincia para enfrentar al Gobierno, porque están muy duros, porque efectivamente funcionan por encargo de las grandes empresas.

Y porque se quieren llevar puesto el derecho histórico de la clase trabajadora nosotros rechazamos el proyecto, vamos a votar en contra, vamos a ir a la movilización y a seguir luchando porque vamos a impedir que este proyecto de ley, que ustedes aprueban hoy, sea llevado adelante, porque vamos a seguir con las huelgas, cortando calles y movilizándonos cada vez que la clase trabajadora lo necesite.

Son ustedes, los que aprueban este proyecto de ley, los principales enemigos de la clase trabajadora.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: primero, quiero –porque en ese momento no voy a poder hablar- que conste nuestro más profundo rechazo al proyecto 22223, 22247 y a cualquiera que se les parezca o se agregue, donde se inste a los legisladores nacionales y demás a que traten de darle legalidad a la ilegalidad que hoy se va a hacer acá. Lo de hoy es ilegal, es un mamarracho jurídico, es anticonstitucional, es un avasallamiento a los derechos.

Pero como se habló del conflicto del transporte, vamos a empezar a hablar del mismo conflicto. Decir que esto fue intempestivo es mentira, fue recontra anunciado, cinco años ininterrumpidos de conflictos porque no respetan los acuerdos laborales, salariales, porque están liquidando el sistema de transporte público de pasajeros a favor de las mafias privadas asociadas con las mafias estatales, según dijo el Ministro Omar Sereno, y que nunca desmintió. Nada de intempestivo, recontra anunciado. ¿Qué hicieron frente a esos anuncios los que se rasgan las vestiduras para decir que defienden los derechos esenciales de los cordobeses? Fueron contra los trabajadores que hacían esas denuncias, y como no les alcanzó con todo lo que hicieron, también fueron a intervenir el gremio, porque la UTA nacional es parte sustancial de este ataque a los trabajadores; le intervinieron el gremio, cuestión que los trabajadores no tuvieran nada que hacer, que se la “morfaran”, y junto con los trabajadores se la “morfó” el conjunto de los usuarios que también son trabajadores, porque la frecuencia cada vez es menor, porque se han liquidado ramales, porque hay que caminar 20 cuadras a oscuras en la ciudad para tomar un colectivo; cualquiera que viaje a las 6 de la mañana, cuando el transporte es “normal”, como se dice ahora, saben lo que significa, hay que caminar cuadras, algunos caminan 20 cuadras para ver si pueden subirse a un colectivo, ni pensar en sentarse, y ustedes vienen a decir que es “intempestivo”, no. Lo tenían recontra anunciado y no hicieron nada, y esta ley a los únicos que afecta es a los trabajadores, porque si defienden el servicio público, ¿dónde está la intervención a las empresas que han liquidado el servicio público? No existe ni un párrafo.

Hablan de “partes” pero a los únicos que afectan es a una de las partes, la de los trabajadores, estaba recontra anunciado, pero no solo eso. Además, hubo diez formas de levantarlo. Acabo de solicitar un pedido de interpelación al ministro porque no hizo cumplir un acta del Ministerio que habían firmado las empresas, la Municipalidad no la hizo cumplir, engañó a los trabajadores, les dijo que aceptaran eso y se levantarán y se solucionaba todo, levantaron y retiraron la propuesta, hicieron todas las “chanchadas” que se les puede ocurrir ¿Y vienen a hablar de intempestivo y a ensuciar a los laburantes? Acá no hubo nada intempestivo, era sabido y ustedes lo dejaron correr porque lo que querían es basarse en cualquier cosa para imponer un proyecto que ya hemos repudiado hace dos o tres años atrás. Ustedes estuvieron buscando la excusa en la lucha de los trabajadores para “joderles” la vida a todos, porque este proyecto afecta a todos.

Esta comisión que quieren crear, como si fuera la gran cosa que, en realidad, va a ser un puesto para amigos del Gobierno, puede decretar que es esencial cualquier servicio, absolutamente cualquiera, porque tiene una vía de excepcionalidad.

Mañana los expendedores de combustible, los trabajadores de los surtidores dicen que van a la huelga, van a decir que es un “servicio esencial”, porque si no hay combustible no hay transporte y si no hay transporte no hay no sé qué, no sé cuánto.

Ustedes acá están creando una dictadura; Schiaretti llora en los juicios, se abraza con Sonia Torres, pero establece acá las condiciones de una dictadura, es un dictador que quiere imponer por vía del decreto, de la reglamentación y de los funcionarios, liquidando un derecho constitucional que a este país le costó sangre, generaciones enteras de la clase obrera pagaron esto. Y ahora quieren por una ley decir que pueden hacer lo que quieran con el derecho de los trabajadores a protestar, que se defiende el derecho de huelga, al miembro informante le digo que vuelva a la Facultad de Derecho.

Este proyecto condiciona la reglamentación de un derecho, es una limitación de un derecho, esto lo sabe cualquiera, pero no les pusieron una sola limitación a quienes liquidaron el sistema de transporte; esto va a tener consecuencias enormes sobre el sistema de transporte público, porque lo que están buscando es dejarles las manos libres a los empresarios para que hagan lo que quieran y sigan destruyendo el servicio, vaciándolo.

Hay más, ustedes dicen que defienden los intereses de los usuarios, ¡mentira! Si los defendieran podrían haber hecho mucho más. La semana pasada les plantee, -el Frente de

Izquierda fue el único que hizo un planteo concreto- que los trabajadores del transporte, que los usuarios del transporte no padecieran la huelga, los únicos.

Cuando planteamos el problema del “botón cero peso”, que aparte lo planteamos en el 2015 en el Municipio -nosotros fuimos los únicos que dijimos- se me rieron en la cara; ahora, resulta que la ciudad está militarizada, con choferes que no tienen ni siquiera carnet arriba del colectivo, con la Policía con las motos, no se cobraba el boleto. ¿Se podía o no? Cuando les interesa a ustedes, se puede, porque lo que ustedes quieren, en todo caso, es liquidar el derecho de huelga de todos, no sólo en el servicio de transporte.

¿Les interesa la salud como servicio esencial? ¡Se caen los hospitales!; ahora quieren meter a la educación también y la escuela pública tiene deserción hacia la escuela privada.

Ustedes no defienden nada; lo único que defienden son los bolsillos de los intereses que los han puesto en esta Legislatura. Voy a diferir con mi compañero Peressini, que dice que esto es una escribanía de lujo, ¡de lujo, nada!, es berreta, es cantado lo que sucede, ya se sabe que van a votar cualquier cosa que les pongan los que les tienen que poner. Si fuera de lujo, tendría un poquito más de vuelo.

El proyecto es sumamente grave, esto no pasa el filtro de ningún juez o Corte Suprema que decida, por lo menos, atenerse a las cuestiones legales elementales.

Aparte, tiene otro problema: por ejemplo, si se aplica esto, no habría ningún conflicto, absolutamente ninguno; conflictos iban a haber todos, pero no podrían haberlo llevado adelante. ¿Ustedes creen que los choferes podían aplicar esto? No, porque dependían del sindicato para hacerlo, que está intervenido; de un dirigente nacional, Fernández, que es socio de Macri; de un Secretario del Interior que acusa de “tarados” a los trabajadores y que dice “hay que aplicarles la ley”.

¿Cómo hacían los trabajadores de base para lograr, aunque sea, hacer la anticipación, sino pueden hacerlo de acuerdo a esta ley? Y a eso le tienen miedo ustedes, porque no les sirve ni siquiera la burocracia sindical que entregó todo para contener a los trabajadores y, por todos lados, como el agua, las luchas, los reclamos y las necesidades de los trabajadores aparecen. Después dicen que les preocupan los intereses de los usuarios y de la población, ¡no es cierto, es falso!

Señor presidente: es evidente que nosotros votamos en contra de esto y le diré algo: la próxima vez que alguien quiera hacer en esta Legislatura un homenaje a Atilio López me opondré, ¡no lo insulten más a Atilio López!, ustedes están pisoteando todo por lo que él luchó, ¿y después vienen a decir que son parte del mismo lugar? No hagan más homenajes, las hipocresías se acabaron.

Señor presidente: votamos en contra, es moralmente insostenible estar en esta sesión; considero que es un atropello sin límites, que realmente violenta cualquier espíritu democrático y no quiero ser testigo de esto. Voy a acompañar a los trabajadores en la calle.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Antes de concederle la palabra a la legisladora Vilches, le pido al Secretario que lea tres notas que han ingresado en esta última hora a la Presidencia.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 14 de junio de 2017.

Sr. Presidente
de la Legislatura Provincial
Dr. Oscar González
Presente

Me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que no concurriré a la sesión prevista para hoy, en la que se tratará el proyecto del Poder Ejecutivo que intenta reglamentar el derecho de huelga.

La razón de mi ausencia es que a esa hora nos movilizaremos con el conjunto de las organizaciones gremiales de Córdoba en contra de dicha iniciativa.

Al notificar mi posición personal del rechazo, solicito a Ud. haga pública la presente en la sesión y se incorpore al Diario de Sesiones.

Le saludo con atenta consideración.

José Pihen
Legislador provincial

Córdoba, 14 de junio de 2017.

Sr. Presidente
de la Legislatura Provincial
Dr. Oscar González
Presente

Me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que no concurriré a la sesión prevista para hoy, en la que se tratará el proyecto del Poder Ejecutivo que intenta reglamentar el derecho de huelga.

La razón de mi ausencia es que a esa hora nos movilizaremos con el conjunto de las organizaciones gremiales de Córdoba en contra de dicha iniciativa.

Al notificar mi posición personal del rechazo, solicito a Ud. haga pública la presente en la sesión y se incorpore al Diario de Sesiones.

Le saludo con atenta consideración.

Ricardo Vissani
Legislador provincial

Córdoba, 14 de junio de 2017.

Sr. Presidente
de la Legislatura Provincial
Dr. Oscar González
Presente

Me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que no concurriré a la sesión prevista para hoy, en la que se tratará el proyecto del Poder Ejecutivo que intenta reglamentar el derecho de huelga.

La razón de mi ausencia es que a esa hora nos movilizaremos con el conjunto de las organizaciones gremiales de Córdoba en contra de dicha iniciativa.

Al notificar mi posición personal del rechazo, solicito a Ud. haga pública la presente en la sesión y se incorpore al Diario de Sesiones.

Le saludo con atenta consideración.

Ilda Bustos
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- Se incorporarán al Diario de Sesiones, tal cual ha sido solicitado en las notas, el contenido de las mismas.

Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: en primer lugar, dejo constancia del rechazo absoluto a los proyectos 22223 y 22247, que instan a los legisladores nacionales a aprobar la declaración de los servicios esenciales, como el transporte, en el Congreso Nacional.

En segundo lugar, quiero decir que más que oportuna es la lectura de esas notas a esta Legislatura de quienes dieron apoyo testimonial a la lucha de los trabajadores de UTA, pero cuando estaba planteada una medida concreta, categórica, como la huelga provincial para detener el avance sobre los trabajadores de UTA, son ahora los que se ausentan queriendo lavarse la cara del otro lado, mientras esta Legislatura está vallada.

En verdad, es indignante, absolutamente indignante, lo que han hecho con los trabajadores de Córdoba. Es absolutamente indignante y cínico escuchar al legislador informante hablar de que están dando una respuesta a una demanda social frente al problema del transporte cuando durante más de 9 días se dedicaron a instigar una campaña furibunda contra los trabajadores del transporte de Córdoba; de la misma manera que se

dedicaron a lanzar una campaña contra los trabajadores de EPEC cuando el tarifazo, el aumento de la luz, golpeó los bolsillos de la clase trabajadora cordobesa; de la misma manera que lo hicieron con los trabajadores municipales publicando sus datos personales y sus sueldos, para que la bronca de ese 40 por ciento de trabajadores y sectores populares - que ustedes sumen en la miseria y en la más absoluta pobreza- descargue la bronca, el descontento, contra sus pares.

Lo que hacen es dividir las filas de los trabajadores, y ahora dicen que responden a una demanda social. Ahora dicen que se preocupan por los usuarios.

A ustedes no les da la cara, señores, no les da la cara para tanta hipocresía.

¿Ustedes hablan de los derechos de los usuarios?, ¿ustedes hablan de los servicios esenciales?, ¿ustedes van a los hospitales públicos, donde están los pacientes que tienen que esperar meses para recibir un turno, donde faltan medicamentos, donde algunos de ellos ni siquiera llegan a ser atendidos porque se mueren?

¿Ustedes realmente se preocupan por los trabajadores que viajan hacinados en los colectivos? Súbanse a esos colectivos a las 6 de la mañana, vean las caras de las trabajadoras inmigrantes que van a trabajar a las casas de familia en las zonas ricas de la ciudad, seguramente en muchas de sus casas porque tienen sueldos de privilegio y pueden pagar a una trabajadora de casa de familia; vean la cara de los albañiles que van a ver si vuelven al día siguiente a su lugar de trabajo, porque tienen condiciones terribles de explotación, que son víctimas de los crímenes patronales porque no tienen las mínimas garantías de seguridad por las leyes que ustedes aprueban en esta Legislatura, como la Ley de las ART; vean las caras de los trabajadores de la industria automotriz, de las autopartistas, que están suspendidos o despedidos y que ven peligrar su fuente de trabajo cada vez que amagan con una crisis, mientras acá se entregan subsidios millonarios a las multinacionales automotrices.

¿Realmente, ustedes hablan de que defienden a esos usuarios? ¿Realmente a ustedes les importa los trabajadores que viven en Nuestro Hogar 3, que no tienen luz, que no tienen cloacas, que tienen un servicio de transporte de porquería, como el que les llega, que gracias si tienen que esperar 30 minutos para ir a sus casas? Por algo muchos trabajadores identifican que ese plan de emergencia que montó el Gobierno de la ciudad con el Gobierno de la Provincia es muy parecido al servicio que todos los días toman los trabajadores de Córdoba.

En verdad, nadie puede creer que a ustedes les importa los usuarios y los trabajadores más humildes. Y menos que menos les importa la vida de los trabajadores del transporte, basta hablar con algunos de ellos. ¿Saben qué cuentan?, que no hay trabajadores jubilados del transporte ¡porque se mueren, señores!, se mueren a los meses, no sobreviven más de un año producto de los ritmos de explotación brutal a los que están sometidos por las empresas parásitas del transporte. No sobreviven, manejan con temblores, tienen accidentes laborales.

Las trabajadoras del trolebús, que hace seis años que trabajan, ya llevan seis años que están pidiendo que les cambien el asiento porque les duele la columna, porque se quedan paralizadas. Les doy sus nombres. Vayan a preguntarles a esas trabajadoras.

¡No les da la cara, señores! No tienen idea que esas trabajadoras, mujeres de familia, a las que ustedes alientan a despedir, son las que están peleando por su salario. Para esto, mostraron su recibo de sueldo: 9000 pesos de básico, y ustedes montan la campaña, junto con las empresas mediáticas, de que tienen sueldos de privilegio. ¡Realmente no les da la cara! Y esto es así porque han privatizado todos los servicios realmente esenciales para la población.

En la salud y en la educación no hay calefacción, los niños están en un número de 40 en las aulas y las docentes sacamos carpeta psiquiátrica por las situaciones que tenemos que atender todos los días. Mientras tanto, ustedes, que garantizan los negociados de las empresas y hablan de cuestiones del ambiente, ¿qué dicen de la catástrofe de Taym, en donde la garantizan el negocio al empresario?

¿Ustedes hablan de los servicios esenciales y de que les importan los usuarios? Sol los mismos partidos que garantizan los negociados de las empresas en el transporte y los mismos que garantizaron y llevaron a la masacre de Once. ¡Pura hipocresía!, porque detrás de eso están los verdaderos negociados que hacen con las empresas.

ERSA, la empresa que tiene estrechos vínculos con el Intendente Mestre y su familia, de la época en que el padre Mestre fue interventor de Corrientes y se ligó a Romero, que

ahora pertenece a la empresa Romero Sociedad Anónima, y se fue quedando paulatinamente, producto de los negociados que ustedes les garantizaron, con la mayoría de los corredores.

La empresa ERSA, que maneja el 75 por ciento de los corredores en la provincia, 6 de 8 de la ciudad, que tiene el 50 por ciento del negocio de la basura a través de LUSA, y que está haciendo negocios de la mano del macrismo, fue parte, junto con la FATAP a nivel nacional, de negociar el aumento de los subsidios con Dietrich para las empresas del transporte en el interior. Estos son los negociados que ustedes están garantizando.

Los procesos de “cartelización” y monopolización del transporte de la ciudad son los que ustedes están defendiendo cada vez que atacan a los trabajadores. Y cuando hablan de servicios esenciales, es porque cada vez que los trabajadores han enfrentado el ajuste, procesos de privatización y ataque al salario y a las condiciones de vida, hemos visto discutir el problema de la imposibilidad de los trabajadores de hacer huelga, que está garantizado estrictamente en la Constitución Nacional.

Hablando de los servicios esenciales, ya lo hizo Perón en 1945, cuando impuso la primera reglamentación sobre el derecho a huelga. Luego, avanzaron los gobiernos militares de las décadas del '50 y del '60, y en el '74, Perón, con la Ley 20638 dio un nuevo avance. En la dictadura, a partir del '76, con la Ley 21261, se prohibía el derecho a huelga, y directamente con la Ley 21.400, que consideraba que era delito cualquier huelga o medida de acción directa. En los '90, Menem, antes de avanzar con las privatizaciones, avanzó también declarando y regimentando esto bajo el argumento del “servicio esencial”. En el kirchnerismo, en el año 2005, cuando comenzó el proceso del sindicalismo de base, con las huelgas del subte y del Hospital Garrahan, de aquellos sectores que comenzaban a pelear y a levantarse para defenderse de las condiciones brutales que les habían dejado los '90 con el menemismo, también reglamentó artículos.

En ese momento, se estipuló que esa comisión técnica -de la que ustedes ahora dicen que hacen esa reglamentación y adecuación provincial, que supuestamente es independiente y va a decir, de acuerdo a la extensión, a la duración, es decir, según el arbitrio absoluto de quienes la conformen, que nada tienen de independiente porque los designa esta Legislatura y el poder político de turno- y va a definir si son servicios esenciales o no.

Es raro que no se les haya ocurrido hablar. No vaya a ser que a alguno se le ocurriera ver la Ley de las Garantías compensatorias, que también está estipulada.

Ahora, es obvio que este proyecto de ley garantiza la prohibición y la limitación del derecho a huelga; esas garantías compensatorias son una abstracción -o más bien una entelequia.

Esto que están por votar no es solo ilegal -porque es ilegal que lo haga una Legislatura provincial, porque es inconstitucional- sino que los servicios esenciales están taxativamente estipulados por la Organización Internacional del Trabajo; ahí se dice que ni el transporte en general ni el metropolitano, ni la educación, son servicios esenciales. No pueden avanzar sobre el derecho a huelga, ni limitarlo, ni prohibirlo, ni cercenarlo, como lo quieren hacer.

En realidad, lo que están mostrando con la aprobación de este proyecto de ley es el carácter profundo y rabiosamente antiobrero que tienen los partidos que van a votar en esta Legislatura; rabiosamente antiobrero como rabiosamente antiobrera fue la campaña que desataron en los medios de comunicación.

Claro que para ello han tenido el acuerdo y el aval de otras instituciones de la Provincia como el de esta Legislatura, con el coro y el circo que fueron a hacer a Casa de Gobierno; como el de las instituciones que fueron cómplices de la dictadura, como las Iglesias -que hoy integran el COMIPAZ-; obviamente, como el de las empresas y las cámaras empresariales, que están chochas aplaudiendo lo que ustedes van a votar; como, claramente, el de la UTA, que insulta a los trabajadores, que los deja librados a su suerte, que patotea como patoteó a los trabajadores de las líneas, que en la Provincia de Buenos Aires también se opuso al convenio y al acuerdo miserable de salario que impuso la conducción nacional para esta paritaria -como se levantó en Rosario, en Neuquén y en distintos puntos del país.

Es decir, para nada era ilegítimo el reclamo de los trabajadores cordobeses, pero el concurso, también lo han dado aquellos que se lavaron la cara haciendo declaraciones testimoniales de apoyo, que hoy mandan notas a la Legislatura porque no quieren quedar

pegados al Gobierno y a la bancada a la que pertenecen, porque se los comen crudos los trabajadores, porque no los quieren ver, porque saben que los traicionan, porque van haciendo esa experiencia.

¿Por qué, en definitiva, tuvieron que buscar todos esos acuerdos? Porque lo que están haciendo es demostrar que la Izquierda, más allá de todo lo que vayan a decir en esta Cámara después, tiene razón, porque la fuerza de la clase trabajadora es una fuerza a la que le temen las burocracias, el Gobierno, las patronales, todos aquellos que ven cuestionado el poder de sus negocios.

Esta es la fuerza de la clase obrera en Córdoba, por la que se tuvieron que juntar todos para tratar de derrotarla; todos, no quedó ni uno que no jugara a favor de derrotarla, que no actuara en pinza, que no desarrollara montones de maniobras para derrotar a esa poderosa clase trabajadora que sale a las calles, que muestra, que parece que los asusta con el fantasma del Cordobazo. Esta es la clase trabajadora que demuestra todo su poder.

Detrás de esta regimentación del derecho a huelga, lo que asoma es el fantasma, al que tanto miedo le tienen, de las huelgas metropolitanas, de las huelgas generales que demuestran quién tiene el poder, quién maneja la economía, quién es al que realmente le interesa el derecho de los trabajadores y de los usuarios, porque todos los días los trabajadores del transporte trabajan en condiciones paupérrimas para trasladar a la población a sus lugares de trabajo; porque todos los días los trabajadores de salud se levantan y atienden a los enfermos como pueden, aun a costa de su salud. Lo mismo hacemos los docentes y los trabajadores de la energía, que están expuestos a riesgos eléctricos y riesgos para su salud. Les pasa lo mismo a los trabajadores de la recolección de residuos, que estaban en el último orejón del tarro y que salieron a reclamar porque ven que es su derecho el que va a ser atacado.

Nosotros defendemos a esa clase trabajadora, a la que le tienen miedo porque son los que demuestran que todos los días esta Provincia, este país y este mundo se mueven porque ellos salen a trabajar.

A ustedes no les importa nada. No les importa que viajen como ganado, que sean un número que cambia –porque son 200 y entran 200.

Señores y señoras: es en esa clase trabajadora en la que el PTS, en la que el Frente de Izquierda confía profundamente. Los trabajadores y trabajadoras del transporte, los choferes, tendrán que sacar sus conclusiones, tendrán que ver quiénes fueron sus enemigos y sus aliados, tendrán que ver en quiénes pueden confiar. Ese será el proceso que se estará desarrollando en estos días, pero dieron una experiencia enorme, histórica; dieron una huelga heroica contra todos esos que quieren derrotarlos.

Por eso, señores y señoras, confiamos en los trabajadores del transporte, en la alianza poderosa que pueden sellar con el resto de los usuarios, porque ya aprendieron que tienen que tratar de demostrarles que su interés es el interés de la población. Por eso, están discutiendo la medida -que incluye el proyecto que presentamos con los compañeros del Frente de Izquierda- del “Botón Cero Pesos”. Están sacando esas conclusiones.

Por todo esto, estamos muy orgullosos de los trabajadores del transporte. Trataremos de convencer a los demás trabajadores de que los trabajadores del transporte son sus aliados, como el conjunto de la clase obrera cordobesa. A ellos es que les debemos la fortaleza que sacamos todos los días para seguir adelante, enfrentando todo tipo de leyes como las que ustedes votan en este recinto.

Con esos compañeros, con trabajadores de subte que vinieron a solidarizarse, con los trabajadores de la alimentación que mandaron su solidaridad, con los trabajadores de las escuelas, que fueron mandando saludos, es con quienes hoy estamos repudiando este proyecto de ley ilegal e inconstitucional, que lo único que demuestra es el carácter rotundamente antiobrero y gorila que tiene lo que van a aprobar y las políticas que ustedes desarrollan.

Por eso, señores y señoras, me voy a retirar y voy a acompañar a los trabajadores de la UTA.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.

Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.

Nuevamente –y lamentablemente- nos volvemos a encontrar en una situación en la que vemos que el Gobierno de la Provincia sigue entregando los derechos no solamente de los trabajadores, en particular, sino de toda la sociedad en general.

Entendemos que lo que se trata de llevar adelante hoy es, netamente, privilegiar los intereses de los empresarios. No hay otra imagen, no hay otra forma de visibilizar el atropello que han hecho con este proyecto de ley.

Este proyecto fue anunciado por el Gobernador Schiaretti, quien llamó a la Casa de Gobierno a diputados nacionales y a legisladores –a algunos, porque no todos fuimos invitados. Allí, no vimos ni siquiera a un representante de los trabajadores, no vimos ni siquiera a un secretario general de las organizaciones sindicales, que son legitimados por los trabajadores, que son legitimados por el voto popular de los trabajadores.

Esta ley no tiene gollete, legisladores. ¿A Unión por Córdoba, a ustedes, se les ocurre, se les ha pasado por la cabeza pensar que están yendo en contra de las leyes que hizo el justicialismo, el peronismo? Están yendo en contra de todo; están yendo en contra de las PyMEs y de los jubilados –con la 10.033-; están beneficiando a las empresas con el blanqueo de capitales.

Hace una semana, nos tocó votar la ley de ART, o sea, la flexibilización laboral neta. ¿O se olvidaron de la historia? Entendemos que factores exógenos intentan hacernos creer a la sociedad en general que el sindicalismo es malo, que nuestra historia ya pasó. Nos olvidamos de los '80, cuando se quería erosionar a las organizaciones sindicales con la Ley Mucci; en los '90, con la flexibilización laboral un gobierno neoliberal intentó llevarse puestas las mismas leyes que ustedes intentan hoy de la mano de la receta de Washington; en el '98, '99, 2000 y 2001 con la resistencia de los trabajadores. Eso es lo que nos da la autoridad moral para decir en qué provincia, en qué ciudad, y en qué Argentina queremos vivir. Eso es lo que nos da la autoridad a quienes estamos hoy acá y a quienes están en la calle, que son representados por nuestros dirigentes sindicales legitimados y que hoy nos dan razón de ser entendiendo que estas leyes vienen por todos los trabajadores y no estamos dispuestos a entregarlos porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias, es decisión de todas las centrales obreras.

Lamentablemente vemos cómo la Provincia se está llevando puestos todos los derechos de los trabajadores, intentando promover el servicio de transporte como un servicio esencial con una comisión de cinco integrantes puestos exclusivamente por el Gobernador, o sea, que la decisión de que una protesta es de un servicio esencial o no y si se puede condicionar o no, es directamente una decisión política, ni siquiera hay un representante de los trabajadores en esa comisión que pueda tener la voz y decir cuál es su posición.

Es lamentable que Unión por Córdoba siga siendo la mano derecha, en Córdoba, del macrismo, que sea un aliado del mestrimo; entonces, lisa y llanamente aliados de quienes entregaron al país, de quienes nos volvieron a endeudar a nosotros, los jóvenes, a los que vienen, a nuestros abuelos y a los trabajadores.

“La única verdad es la realidad”, decía el General, y la realidad es que Unión por Córdoba va a entregar a los trabajadores atados de pies y manos, porque no hemos visto ni siquiera un solo artículo en esta ley sobre cuál es el rol que van a cumplir los empresarios. Sabemos muy bien cuál es el rol de los empresarios: “llevársela en pala”, como siempre lo hicieron, y seguirlo haciendo a costilla de los trabajadores. Es mentira que nosotros pagamos los sueldos de los trabajadores, como dicen muchos medios de comunicación o factores exógenos; los trabajadores se ganan el sueldo con la espalda todos los días, señor presidente. Dejen de mentirle a la gente. Los trabajadores se lo ganan de su costilla todos los días.

El ciudadano de a pie, el que hace changas, el cuarenta por ciento de desocupados que tenemos en nuestra Provincia, el 10,3 por ciento de indigentes, el 55 por ciento de niños pobres, ¿cómo hacen esas familias para subsistir? No les interesa, siguen dejando trabajadores en la calle, vemos cómo las PyMEs siguen perdiendo su nivel de producción y pareciera que eso les pasa por el costado. Ni siquiera en las comisiones dejan discutir, avasallan con todo. ¿Por qué comisión pasó este proyecto de ley? Déjennos discutir, por lo menos, sobre lo que creemos que está bien porque tenemos la autoridad moral para hacerlo. No nos queremos llevar puesto a nadie sino que queremos dar las discusiones, debates y argumentos sustentables para sostener nuestro discurso y el de nuestros compañeros, el de los trabajadores y el de la ciudadanía.

Ustedes son los que se encargan de llenarle la cabeza a la gente diciéndole que los trabajadores van en contra de la sociedad. Los trabajadores somos la sociedad, señor presidente, somos quienes sacamos adelante a este país. Lamentablemente, hoy están entregando todos los recursos, y a la Ley de Bosques también intentan condicionarla con esta ley. ¿O se creen que los dirigentes somos tontos?, ¿que los trabajadores son tontos?

En definitiva, ustedes mismos son los que llevan adelante todas estas políticas, las mismas políticas que lleva adelante, a nivel nacional, el macrismo, que deja entrar con las leyes a los mercados internacionales –porque sabemos muy bien que ellos son los que promueven estas leyes de flexibilización laboral– y que vienen en contra de las empresas del Estado, vienen solamente por la privatización de todos los servicios y, señor presidente...

Por allá se ríen, en verdad, no sé de qué se ríe el presidente de la bancada de Unión por Córdoba, pero ya nos tiene acostumbrados, lamentablemente, a las risas, a reírse de los trabajadores, a reírse de la gente. Es lamentable que en un discurso potable como el que arrojamos siempre algunos legisladores, con ganas de aportar –porque acá no venimos a ponerle “palos en la rueda” a nadie, acá venimos a aportar y lo hemos demostrado en nuestros proyectos que hemos presentado en cada comisión y que no se han discutido o nos dejan sin quórum– nos encontremos con esto. Y como pasó a nivel nacional, ¿o no lo han visto en los diarios o medios de comunicación donde ustedes mismos pagan las pautas, que los dejaron sin quórum, a nivel nacional? Porque es una ley inconstitucional, es una ley en la que el artículo 14 bis, solamente en la reglamentación, es netamente de Derecho federal, eso quiere decir que las provincias no tenemos injerencia, es una ley inconstitucional, y nosotros vamos a ir en contra de esta ley.

Los dirigentes vamos a ir a la Justicia para que se declare a esta ley, rápidamente, como inconstitucional. En verdad, es una vergüenza, es una pena que se olvidaran de la lealtad a los trabajadores, de esa masa que nos da razón de ser. El componente popular de cualquier proyecto provincial, municipal o nacional lo ponen los trabajadores; no hay otra fuerza mejor que la de los laburantes.

Es por eso, señor presidente, que no hay forma de votar este proyecto de ley, los va a condenar la historia. En la calle estaremos luchando para que esto sea declarado inconstitucional, y los trabajadores siempre vamos a estar al frente defendiendo los intereses de la sociedad, no los intereses que hoy lleva la política de Unión por Córdoba, a nivel nacional el macrismo y en la Ciudad el entregador de Mestre.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).– La presidencia recuerda que está la Cámara en comisión, de manera que el debate que reclama el legislador preopinante puede darse libremente porque esta Cámara ha votado, previo al tratamiento de este proyecto, declarar la Cámara en estado de comisión, por lo tanto, el debate es libre.

Tiene la palabra la legisladora Nebreda.

Sra. Nebreda.– Señor presidente: realmente, cuando uno llega a la Legislatura y ve las vallas sabe que van a generar un avance y un recorte contra las organizaciones gremiales y los derechos de los trabajadores; cada vez que esta Cámara genera una ley que va en contra de los trabajadores, aparecen las vallas y los policías. Realmente me avergüenza ver en qué han convertido a Córdoba, y Unión por Córdoba al partido Justicialista, ha olvidado sus mejores y fundamentales principios; da vergüenza verlos montarse en el discurso de resentimiento y de bronca de clases, convencidos de que esto es lo que la sociedad quiere escuchar, no importando que se va en contra de la Constitución.

En verdad, desde mis 50 años de estar en la calle digo: hace 50 años que vamos siempre en contra de las clases dominantes y de los “gorilas” de esta sociedad que nos quieren avasallar. Siempre los trabajadores somos los que pagamos, cumplimos y sostenemos el país, pero también somos los que pagamos las crisis. Realmente hay un corazón desgarrado al ver cómo, en nombre del peronismo, se nos va sacando, cada día, un derecho más, al ver cómo, en nombre del peronismo –porque de los “gorilas” no espero nada–, se pretende cercenar el derecho constitucional de huelga buscando así un electorado de derecha. Sólo una insoslayable ceguera ideológica permite el tratamiento de un proyecto que no resiste el más mínimo análisis o examen de constitucionalidad, que los muestra desesperados por hacer los deberes encargados por el poder económico que, permanentemente, les marca la agenda desde sus órganos de difusión.

Además, señores legisladores, esta ley no es necesaria porque las leyes nacionales y sus reglamentaciones fijan con claridad cuáles son los servicios esenciales y cómo y cuándo se puede agregar otro servicio. Pero claro, siguen confundiendo a la sociedad hablando de “servicios públicos” y de “servicios esenciales”, mezclando todo para que no puedan razonar.

La sociedad está enojada y ahí va la derecha, ahí llega y saca las peores leyes – recuerdo las que modificaron el Código Penal–, como lo ha hecho siempre. Este planteo de “trabajadores versus cordobeses” –todos somos cordobeses– deja afuera a los responsables políticos de garantizar estos servicios, así como a las empresas. ¿Cuándo los responsables políticos se fijaron en qué pasaba con los servicios de transporte?, ¿cuándo el poder político se fija qué pasa con la salud y con la seguridad?

Creo que hay que tener cuidado con promover este tipo de discusiones porque los sectores sociales generalmente no protestan, pero, cuando protestan, lo hacen con mucha virulencia. Los trabajadores, en cambio, lo hacemos desde organizaciones y siempre sabemos adónde vamos.

Y decir esto es poco porque un proceso de ajuste, de flexibilización laboral y de cercenamiento de derechos no va acompañado sino de represión; esto solamente cuaja con la represión; por eso, en el artículo 18 se establecen cuántos son los días de cárcel y de detención. Esto es realmente inconstitucional por donde se lo mire.

Además, ni la OIT, ni las Constituciones nacional y provincial y ninguna ley se refieren al cercenamiento del derecho a huelga; menos aún, los peronistas. ¡Hoy no sabemos dónde están los peronistas y dónde la derecha gorila! Eso es lo que pasa y lo que indigna.

Sepan que están votando con 120 familias en la calle; eso, realmente, es muy grave y doloroso. Y después hablan de “pobreza cero” y dicen que defienden a los más necesitados, que están buscando fuentes de trabajo y que las empresas están generando espacios para trabajar.

Quiero decirles, señores representantes de la república autónoma de Córdoba, que no cuenten conmigo para aprobar este delirante atropello a los trabajadores. Saben que están haciéndolo mal y, además, no les va a durar nada porque se trata de un “acting” que no responde a la realidad; esto es inconstitucional y el trabajador no lo va a respetar. Tarde o temprano, seguiremos adelante.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Juez.

Sr. Juez.- Señor presidente: en primer lugar –la verdad, cambié el inicio de este discurso en varias oportunidades–, quiero decir que los seis legisladores presentes del Frente Cívico no somos ni gorilas, ni fachos, ni pro patronales, ni antiobreros, ni rabiosamente antiobreros, ni de ninguna derecha gorila. Podemos dar cuentas de lo que hicimos cuando tuvimos la responsabilidad de gobernar la ciudad de Córdoba.

Me voy a tomar el atrevimiento, señor presidente, de acercarle por Secretaría una escueta biografía del “facho” y “gorila” ex Presidente Rafael Correa y del Presidente Tabaré Vázquez. Dice un título del diario La Nación de ayer: “Tabaré Vázquez dicta un decreto que impide la huelga del sector del combustible”, y resulta que el “facho”, “gorila” y “antiobrero” de Tabaré Vázquez gobierna por los intereses de todos los trabajadores uruguayos.

Entonces, es injusto poner calificativos a quienes, entendemos, están defendiendo desde estas bancas los intereses de otro sector trabajador. Nadie está en contra de ninguna huelga, en lo absoluto; siempre hemos defendido ese derecho. Cuando tuvimos la oportunidad de representar al Estado ante el primer conflicto gremial allí estuvimos presentes resolviéndolo. También es justo hacer memoria y recordar que después de 13 años la dirigencia política se ha puesto los pantalones largos y han actuado los fiscales de oficio, el Ministerio de Trabajo, la Policía y el Gobernador acompañando al intendente de la ciudad de Córdoba. Digo esto porque hace algunos años esta situación era impensada por la mezquindad de los intereses políticos que ponían a los usuarios de rehenes.

Acá no estamos en contra de ningún interés de los trabajadores y desde el Frente Cívico vamos a seguir defendiendo los intereses de los laburantes. Que no les quepa ninguna duda porque no quiero salir de acá y que nos tilden de gorilas y antiobreros.

Vamos a seguir defendiendo los intereses de los laburantes. Pero también, quienes tienen derecho a trabajar y se les ha impedido hacerlo durante estos 10 días, están esperando este gesto de los legisladores, que nos pongamos los pantalones largos y alguien

los defienda. Parecería injusto que quien está agremiado tenga quien los defienda y quien tiene el derecho de concurrir a su trabajo o de ir a hacerse atender por el médico o quien haya estado buscando trabajo durante los últimos 10 días, haya estado de rehén de intereses mezquinos y de alocados sindicalistas que creyeron que se iban a llevar las instituciones puestas.

No, señor presidente, por encima del reclamo están la Constitución y las leyes. Acá hubo una conciliación obligatoria que se la pasaron por las orejas, y a eso no lo hace cualquier gremio, señor presidente. No todos los gremios tienen la posibilidad de desoír el poder del Ministerio de Trabajo. Entonces, no estamos defendiendo absolutamente a ningún sector en particular. No vamos a venir a hacer un “acting” ni a llorar defendiendo los intereses de los laburantes porque lo hemos hecho; hemos dado cuenta de ello y hemos sido el hazmerreír de la sociedad cordobesa cuando en el 2004 se aprobó en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba la primera ordenanza modelo declarando al servicio público de transporte como servicio esencial. Se nos “cagaban” de risa cuando preguntaban quién iba a armar un padrón o quién se iba a subir a un colectivo. Sin embargo, ayer y antes de ayer estuvieron dadas las condiciones para que esos laburantes que quisieran prestar el servicio público de transporte; no es gracioso que hubiera más de 500 currículum presentados en las empresas de transporte público de pasajeros.

Acá no es una lucha de trabajadores contra trabajadores; es una lucha de un poder político que viene utilizando sistemáticamente los medios de presión para poner a trabajadores contra trabajadores. No lo vamos a permitir y no vamos a salir de este recinto con los mote de “gorila” y “antiobrero”.

Nada más.

-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR JUEZ-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: si hay una ley importante que va a tratar esta Legislatura es, precisamente, ésta. Una ley en virtud de la cual indirectamente se reglamente el derecho de huelga, derecho consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución.

¿Era justo que una ley de esta naturaleza se trate en 20 minutos, sin ningún tipo de estudio o profundización? Entonces, ¿para qué estamos?, ¿para qué están las comisiones?, ¿para qué está la Comisión de Asuntos Constitucionales?

Ha sido miembro informante de este proyecto el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y le preguntaría qué debate abrió para esta ley. Claro, me está contestando la Presidencia a través de sus secretarios diciendo que somos todos los que estamos en deuda.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, la Presidencia no le está contestando absolutamente nada a través de nadie. De manera que continúe en el uso de la palabra y no me invoque.

Sr. García Elorrio.- Bien, señor presidente, sigo. La Presidencia debió tomar las medidas para que un debate de esta naturaleza no pasase así, con esta magnitud, con esta velocidad. No era el camino ni la forma. Es el mismo esquema que usaron cuando aprobaron la 10.333; el “esquema express”.

En definitiva, siempre que han legislado así nos hemos equivocado. Y hoy se va a volver a equivocar esta Legislatura porque esta ley va a tener la vida excesivamente corta. Es una de esas leyes que llamamos “leyes caducas antes de nacer”. Digo esto porque no es competencia de esta Legislatura sancionar lo que se va a sancionar hoy, señor presidente, y es responsabilidad de esta Cámara y de sus autoridades hacer un filtro elemental de constitucionalidad de los temas que se ponen a debate. Si no, qué sentido tiene que tengamos autoridad de Cámara o qué sentido tiene si no tomamos ni esos mínimos recaudos de poner a votar normas.

Al respecto, voy a citar un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de un sindicato policial contra la Provincia de Buenos Aires por el que ha recordado que toda legislación que toque referencialmente, que toque de costado o

reglamente el artículo 14 bis es derecho federal. ¿Sabe qué significa “derecho federal”?, derecho reservado exclusivamente al Congreso de la Nación.

O sea, esta ley que se pretende aprobar es doblemente inconstitucional porque pretende inmiscuirse en temas de derecho nacional común y en temas de derecho nacional federal. Los señores legisladores –muchos con título de abogados- no podrán desconocer que esto le está vedado expresamente a las provincias.

Creo que si esto hubiera ido a la Comisión de Asuntos Constitucionales podríamos haber visto este fallo de la corte que es reciente, todavía está tibio. Es un fallo del máximo tribunal de la Nación que, referido a la Ley nacional 25.877, es de jurisdicción nacional. Se trata de una ley dictada durante el Gobierno del Presidente Kirchner que establecía claramente cómo debía reglamentarse todo lo vinculado a las Convenciones Colectivas de Trabajo. En esta ley nacional se estableció que la única autoridad de aplicación para todo lo atinente al derecho nacional común, es decir, todo lo vinculado a las Convenciones Colectivas de Trabajo y al Contrato de Trabajo donde aparece la cuestión de los servicios esenciales es una ley nacional de legislación nacional común, reservada exclusivamente al Congreso de la Nación Argentina.

Entonces, desconocer esto carece de todo tipo de justificación. Pero es más grave aún porque en este mismo fallo la Corte recuerda que toda reglamentación que roce el artículo 14 bis es derecho federal, o sea, no sólo derecho nacional común sino, encima, como está en juego el derecho de huelga, es derecho federal. Ninguna Legislatura puede, de ninguna manera, dictar ninguna norma que, por derecha o izquierda, por arriba o abajo, toque el derecho de huelga.

¿Qué quiero decir con esto? Fíjese el absurdo. Si Córdoba se va a lanzar a reglamentar el derecho federal, imagínense lo que sería si La Rioja lo hiciera de otra forma, Tucumán y Tierra del Fuego de otra, es decir, no hay manera. Por eso, creo que está bien, ustedes con esta ley satisfacen un clamor social, pero lo hacen con una mentira porque, ¿qué va a pensar el ciudadano “medio”, que está clamando que no le vuelva a pasar esto, cuando vea que en un tiempo prudencial cualquier juez de Trabajo le diga: “usted, Legislatura de Córdoba, no tenía facultad para meterse -nada más y nada menos- con la reglamentación del derecho de huelga”?

Este fallo de la Corte a lo único que autoriza a las autonomías locales, a las Provincias, es a introducirse en estas cuestiones referidas al empleo público. Pero nunca lo podía hacer en materia del transporte público, porque no está comprendido expresamente en la ley nacional a la que antes me referí, y no estaba el transporte público vinculado a eso. En definitiva, ¿qué estamos haciendo? Estamos votando algo que tiene un efecto social, “tribunero” -no hay duda-; que les resuelve el problema a algunos “muertos políticos” que gobiernan algunas jurisdicciones en esta Provincia; que levanta de las cenizas, como Lázaro, a algún muerto pero, muy próximamente, vendremos a debatir aquí el tema de los residuos sólidos urbanos, cuando se termine de resolver la cuestión, y también veremos qué hace esta Legislatura para arreglarle el “estofado” a alguno.

En definitiva, esto es debate rápido, debate irresponsable, debate en contra la ley, expresamente contra la ley y expresamente contra la Constitución Nacional, destinado a seguir la suerte de las legislaciones oportunistas que van a terminar no dándole a la gente lo que la gente quiere, porque si lo que queremos es que esto no vuelva a pasar más, lo que tenemos que hacer es lo que he propuesto humildemente y que se va a votar también, que dentro de las declaraciones, aprobar una resolución pidiéndole al Congreso Nacional, exhortando a los diputados nacionales e instruyendo a los senadores nacionales por Córdoba que aborden este tema. ¿Cómo se podría abordar este tema? Con un proyecto que reformase la 25877 e incluyese el servicio público de transporte dentro de los servicios esenciales.

Además, el Ministerio de Trabajo de Córdoba no tiene ninguna posibilidad –ni esta Legislatura- de crear ninguna comisión, ¿sabe por qué? Porque la Ley 25877, ley de legislación común de la República, que contiene normas de derecho federal, ha establecido claramente que la única autoridad de aplicación de estos temas es el Ministerio de Trabajo de la Nación.

En el proyecto que yo he presentado, también de resolución, se le pide al Poder Ejecutivo nacional que ponga en marcha el movimiento de la comisión nacional, creada por la Ley 25877, para incorporar -aunque sea transitoriamente hasta que saliera la reforma de la ley nacional- el servicio de huelga.

O sea, tenían todo para hacerlo bien, aprobar un proyecto de resolución y lograr que quien estaba en condiciones de hacerlo, hiciera lo que tenía que hacer. Ahora, ¿qué necesidad hay de hacerlo así, si se podía hacer bien, por respeto a la gente a la que le estamos sancionando esta ley, por ese clamor social para que esto no vuelva a pasar? ¿qué necesidad había de hacerlo mal?

Me imagino cuando algún juez de alguna entidad sindical, mañana o pasado, le plantee un amparo y le diga: “Le hago un amparo por el artículo 14 bis de la Constitución, reglamentado por quien podía reglamentarlo, la Ley 25877, y la Legislatura de Córdoba se ha arrogado facultades de reglamentarlo”. Nos van a decir: “Medida Cautelar, suspéndase”. ¿Y qué le vamos a decir a todos esos cordobeses que están afuera esperando una respuesta? Están esperando una respuesta responsable de esta Legislatura. Esa respuesta responsable hubiera sido cumplir las leyes de la República y no canibalizar por un rédito electoral tan transitorio, como resucitar a los muertos políticos para arreglarles este “estofado”.

La gente se va a enterar porque no es tonta; el ciudadano cordobés tiene una rápida percepción, y cuando el primer juez le pegue un garrotazo a esta ley van a decir: “¿por qué hicieron esto? ¿Por qué no lo hicieron bien?”:

Ustedes me dirán: “El Congreso de la Nación no se reúne para hacerlo”. Pero, entonces, el problema el otro, es un problema nacional y no está en nosotros resolverlo.

Yo creo que respecto de lo que va a hacer hoy la Legislatura “es peor el remedio que la enfermedad”; y se lo decía a un legislador de Unión por Córdoba, si esta protesta de los trabajadores de UTA, que con el paso del tiempo carecía de legitimidad política y sindical, ya que se fueron violando todas las normas en la materia, no se respetó la conciliación obligatoria, etcétera, esa falta de legitimidad absoluta que tenía la protesta y dejaba a los cordobeses de rehenes, ahora se la van a dar y no solamente a los trabajadores de UTA, sino también se la van al sector público de Córdoba; se la van a dar a un montón de sindicatos, y fíjense que las espaldas laborales de Unión por Córdoba hoy no están aquí, se han ausentado porque tienen que responder a sus bases antes que a la responsabilidad de legislar por los cordobeses; tienen que darse cuenta que ahí está su poder político y no vaya a ser que la paz social se afecte sobremanera cuando esto se podría haber hecho bien.

También creo, como muchos de ustedes, que los cordobeses no pueden ser rehenes del desorden de magnitud, del derecho del trabajo, de los que querían trabajar y no podían, del derecho a la salud de los que no podían ir a los hospitales; del derecho a la vida de las personas que estuvieron en riesgo al no poder trasladarse a un hospital para ser atendidos; del derecho a la educación para poder ser atendida, del derecho a la educación de los chicos que no pudieron ir a los colegios, del derecho de trabajo de sus padres que no pudieron ir a trabajar, no solo porque no había transporte sino porque no tenían quien cuidara los chicos, en fin.

Como creo en todo eso no puede volver a pasar, quiero soluciones en serio, no soluciones para la tribuna, profundamente ilegales, para mejorarle el perfil electoral a quienes durante años han hecho de sus funciones esenciales un desastre continuo, y me estoy refiriendo, en concreto, a la Municipalidad de Córdoba. Fíjese usted, hubo ocho días sin transporte público, ¿y no vamos a hablar de la responsabilidad de la Municipalidad en esto por no saber manejar el conflicto? No vamos a hablar de conflictos a repetición, ahora hay veinte municipios del gran Córdoba que no saben dónde tirar la basura por la improvisación absolutamente permanente de unos socios políticos del Gobierno de primera magnitud, porque podrán gritar y cacarear, pero cuando tienen que cuidarse la espalda, todos aparecen juntitos.

En definitiva, lo que planteo con toda humildad es: ¿para qué hacer mal lo que se puede hacer bien? Mire lo simple que es. Y hacerlo bien era exigir al Congreso de la Nación, y el argumento de que el Congreso no se reunió ayer se resolvía, porque hubiera bastado una llamada del Gobernador de esta Provincia al Presidente de la República -del cual es su amigo dilecto- para pedirle que se pusiera en marcha de inmediato la comisión creada por el Decreto que reglamenta la Ley 25.877 y en veinticuatro horas le hubieran incluido al servicio público de transporte transitoriamente dentro de dicha ley, porque son facultades expresas que tiene esa comisión, delegadas por la ley nacional; en veinticuatro horas hubiera declarado esa comisión, ante la envergadura del conflicto, y hubiera dicho que en la Provincia de Córdoba, transitoriamente, hasta que el Congreso trate una eventual o no reforma de la Ley 25.877, y se hubiera resuelto el conflicto. Pero prefirieron el peor camino.

Fíjese: el Intendente de Córdoba, que si bien no es bueno para gestionar, tiene buenos asesores jurídicos, no le pidió esta ley a esta Legislatura ni al Gobernador de la Provincia, no se le pidió. ¡Fíjense que interesante lo que está pasando acá: le pidió lo que yo le he pedido, le pidió que se exhorta a que los mecanismos nacionales...! Porque la Unión Cívica Radical tiene muy buenos asesores en materia de derecho del trabajo y, seguramente, le han dicho que el camino era ese, y fue el Intendente de Córdoba por ese camino. Pero Unión por Córdoba, evidentemente, dio vuelta el tema y le devolvió esta ley en tratamiento.

No voy a aceptar -así como el legislador Juez dijo que no va a aceptar que le salgan a decir que esta ley es gorila, antiobrera, etcétera-, que se diga que, al no votar esta ley, creo que hay que dejar que este conflicto se vuelva a suscitar; no quiero eso, he presentado un proyecto, que creo que será aprobado en la Legislatura dentro de las declaraciones generales, que pide se pongan en marcha los mecanismos para que no se vuelva a presentar el problema; tampoco quiero que se vuelva a presentar el problema, pero quiero que no se vuelva a presentar en serio.

Imagínense cuando mañana tengan una cautelar, un amparo, los sindicatos que tiren esto, ¿ustedes saben la regresividad que tiene el conflicto?

Quiero dejar expresamente claro que no quiero que el conflicto se vuelva a repetir, y que quiero que se tenga en cuenta el proyecto que he presentado, que va en el mismo camino que la ley que van a aprobar ustedes, pero con la diferencia de que va en un marco de legalidad, no va en un marco tribunero.

Y otra cosa que no me puedo olvidar: si hubiéramos tenido tiempo de tratarlo en comisión, hubiera querido escuchar a esos delegado de UTA en esta Legislatura, que me explicaran a qué se referían cuando hablaban de que acá había una pelea de bolsas; porque puede ser una pelea de bolsas, como cuando los boxeadores se entrenan, que ponen una bolsa consistente, le empiezan a pegar; entonces, en definitiva, era una pelea de ver quién era más fuerte, la bolsa o el boxeador. Pero si lo que estaban gritando a los cuatro vientos los delegados de ERSA, de estas empresas de transporte, es que esto era una pelea de otra bolsa, y como vimos hace poco en un debate que planteó un legislador, que también había bolsas en transporte de la Provincia, que había un sistema de bolsas en el transporte provincial, ¿a qué bolsas se estaban refiriendo?, ¿cómo a nadie le preocupa eso?, ¿hay fondos dando vuelta entre el poder político de Córdoba, las empresas y los gremios?, ¿cuál es la bolsa? Porque los cordobeses también tienen que saber que el conflicto -como todas las cosas que lamentablemente nos pasan- puede haber provenido -no me consta- de una custodia de bolsas, y vuelvo un poquito atrás, ¿por qué no los trajimos para preguntarles?, ¿no son ciudadanos?, ¿por qué no trajimos a la empresa de transporte para que nos contara?

Estimados amigos, se los digo francamente: han tomado la peor de las soluciones.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Cafaratti.

Sra. Cafaratti.- Señor presidente: en contra de nadie y a favor de todos los ciudadanos, pensar en la gente, eso nos mueve y de eso se trata este proyecto: pensar en lo colectivo por encima de lo individual y sectorial.

En las antípodas de lo que he escuchado de los legisladores Peressini, Salas, Vilches y de los legisladores "K", creo que la jornada de hoy quedará signada como uno de esos episodios destacados, donde la dirigencia política se pone los pantalones largos y que, desde la política y desde esta Legislatura, hacemos algo que realmente le cambia la vida a los ciudadanos de esta Provincia. En definitiva, de eso se trata la política y es el sentido de lo que hacemos, y hoy nos ponemos a la altura de las circunstancias.

No todos los caminos son válidos y no podemos justificar lo injustificable, y esto es lo que vivimos estos últimos diez días en Córdoba: un conflicto irracional que dejó a los usuarios del transporte público librados a su suerte, maltratados y sin ningún tipo de protección ni garantías.

Por eso, señor presidente, debemos compatibilizar el derecho constitucional de huelga con el derecho de los ciudadanos, que tienen que tener garantizados los servicios mínimos y esenciales.

Hay que ser claros: defender los derechos de los trabajadores nada tiene que ver con el maltrato y la irracionalidad que vivieron otros trabajadores y vecinos de nuestra ciudad durante estos últimos diez días.

Por eso, señor presidente, defendemos la garantía de los derechos de los trabajadores y también el derecho de los ciudadanos a tener garantías mínimas de servicios, como el del transporte, esenciales para la dinámica de una ciudad y para el desarrollo de la vida cotidiana de cada cordobés. El principal objetivo radica en que podamos garantizarle a la ciudadanía la prestación mínima de un servicio.

Entendemos que el funcionamiento de transporte público de pasajeros tiene una importancia trascendental para satisfacer las necesidades básicas y vitales de la sociedad. Es por ello que, ante la adopción de ciertas medidas, debemos garantizar una prestación mínima del servicio.

Por la responsabilidad que nos cabe como dirigentes políticos, debemos impulsar y comprometernos en promover el ejercicio de pensar en lo colectivo.

La ciudadanía nos está dando lecciones y nos exige trabajar en conjunto para lograr soluciones y para poner un límite al atropello y lograr garantías al cumplimiento de los derechos de todos.

En este sentido, vamos a acompañar el proyecto y, siguiendo con la defensa de los derechos de los ciudadanos, hoy también acompañamos la resolución presentada instando a los diputados y senadores nacionales por Córdoba a que impulsen la aprobación de proyectos de ley que declaren al transporte urbano como un servicio esencial a nivel nacional.

Gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.

Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.

En verdad, me parece una irresponsabilidad que, desde el peronismo, quienes decimos representar a los trabajadores estemos presentando semejante proyecto.

Esto lo digo porque tengo algunos años y nunca creí que iba a ver semejante irresponsabilidad, que después de tantos días de conflicto en la ciudad de Córdoba con los trabajadores afiliados a UTA, quienes reclamaban legítimamente por su escala salarial, hoy el Poder Ejecutivo provincial proponga, a través de un proyecto de ley, incorporar como servicio esencial el servicio de transporte público y, a su vez, la incorporación de otras actividades que, bajo determinados requisitos y en forma excepcional, se podrían calificar como servicio con garantía de prestaciones mínimas, y también establece sanciones en caso de su incumplimiento.

Ante lo expuesto, primero hay que considerar que, según la Organización Internacional del Trabajo, se entiende que el servicio público de pasajeros no es una actividad esencial, y bien lo aclara la OIT cuando determina cuáles son las actividades esenciales, que son las que ponen en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las personas.

La Ley Nacional 25.867, de Régimen Laboral, en su artículo 24 establece las condiciones en que se regula el ejercicio del derecho a huelga, cuando por un conflicto de trabajo algunas de las partes decidiera tomar medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales. La ley establece taxativamente como esenciales los servicios sanitarios, hospitalarios, de producción y distribución de agua, de energía eléctrica, gas y control de tráfico aéreo, es decir, no el transporte.

Pero bueno, parece que quisieran ir más allá de la OIT quienes dicen pertenecer a un peronismo federal, y también quieren ir sobre leyes que son únicamente de competencia federal.

El miembro informante de Unión por Córdoba obvió el Decreto 272 que reglamentó el Presidente Néstor Kirchner, mediante el cual se formó una Comisión de Garantías. En tal sentido, no entiendo porqué no convocaron a dicha comisión. Esta Comisión de Garantías no depende del poder de turno y no debe hacer lo que el poder de turno le indique.

Cuando por duración, extensión territorial de la irrupción de la actividad, ejecución de medidas que pudieran poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda la población, o cuando se tratara de un servicio público de importancia trascendental, conforme a los

criterios de los organismos de control de la OIT, recién ahí se podría llamar a esa comisión, y siempre que esté conforme la OIT.

De este modo, se advierte que hay un equilibrio en el ejercicio del derecho a huelga y la protección relativa de otros derechos igualmente garantizados por la Constitución, exigiendo en esos casos guardias mínimas. Hubiera bastado, entonces, con que el Ministerio de Trabajo nacional hubiese convocado a esta comisión, ofreciendo las garantías que se necesitan, pero esto no ocurrió y el conflicto siguió.

Y es cierto que hoy hay un mal humor en la gente, porque de eso seguramente hacen mediciones. Pero no se equivoquen; eso es una fotografía que puede llegar a durar un día o dos. En tal sentido, es cierto que enfrentamos a trabajadores con trabajadores, porque quien no podía concurrir a su trabajo o no podía asistir a la escuela está enojado, pero esa es la fotografía de un día. Esta ley no le va a solucionar el problema del servicio público a los trabajadores.

Proyectos de estas mismas características no es la primera vez que en la Legislatura se intentaron llevar adelante, pero fracasaron. Asimismo, el proyecto de ley en tratamiento es sumamente amplio, ya que habla de actividades no enumeradas en la presente ley, poniendo en riesgo los legítimos derechos de la clase trabajadora.

No resulta casual que se propongan estos tipos de proyectos cuando se quiere avanzar en proyectos económicos de tinte neoliberal, que necesitan para su concreción del ajuste y de la precarización laboral.

Podemos concluir que, existiendo mecanismos legales, no es necesaria la demagogia legislativa que pretende el Poder Ejecutivo. También entendemos que las medidas tomadas para salir del conflicto que intentaron llevar adelante hasta ahora los Gobiernos provincial y municipal son sólo a favor de las empresas privadas que prestan servicios y, por ende, se les debió haber exigido que garantizaran desde el primer día su cumplimiento con un esquema mínimo o, en su defecto, el Estado lo debió garantizar.

Acá todo el mundo habla de la cuestión colectiva, de que hay que garantizarles a todos los ciudadanos que puedan viajar. Me pregunto: ¿qué medidas se tomaron contra estas empresas para que cumplieran con lo que tenían que cumplir, según el régimen de servicios públicos? Se les debió haber exigido que garanticen su cumplimiento con un esquema mínimo o, en su defecto, el Estado debe garantizarlo, independientemente de no considerarse un servicio esencial y garantizando los derechos laborales.

Este proyecto de ley, además, es inconstitucional. Esta Legislatura no se puede arrojar atribuciones que corresponden al Congreso nacional, ¿o acaso debemos recordarles que es un país federal?

Además, la situación que generó la redacción de este proyecto nació en un conflicto que se suscitó exclusivamente en la ciudad de Córdoba, cuyas autoridades demostraron su incapacidad e insensibilidad para buscar las soluciones.

La Constitución provincial consagra la autonomía municipal. Nada impide al Concejo Deliberante de Córdoba dictar todas aquellas normas para regular el transporte urbano de pasajeros con las obligaciones con que se deban desempeñar las empresas concesionarias y los derechos de los usuarios, con el fin de garantizar la mejor prestación de un servicio público, teniendo siempre en cuenta la libertad de huelga.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.

Voy a tratar de ser muy sintética.

Creo que los cordobeses asistimos, en los últimos días, a días que nos han generado muchísima angustia, que nos han puesto en situaciones de enfrentamiento entre cordobeses porque, legítimamente, unos defendían sus derechos y otros los veían afectados.

Quizá por esta razón, por la profunda crisis que vivimos en estos últimos días, esta Legislatura debería hacerle honor a la esencia del Parlamento, que implica, básicamente, tomarse el tiempo necesario para debatir.

Este proyecto que hoy van a aprobar corre la suerte de un sistema parlamentario que fue diseñado en la última reforma constitucional de esta Provincia; que no ha previsto, adrede, que existan determinados límites para el tratamiento sobre tablas de leyes que no fueron discutidas convenientemente en el conjunto de las comisiones.

Este es un tema muy serio. No puedo dejar de mencionar que en el 2014 se trató un proyecto de su autoría, señor presidente, y de algunos otros legisladores de Unión por Córdoba; en aquella oportunidad, en el debate parlamentario que se dio, la salida que encontró Unión por Córdoba, básicamente para poder consensuar con sus representantes gremiales, fue la aprobación de una comisión.

Esa comisión, que fue creada en abril de 2014, nunca se conformó ni se reunió para poder debatir, sensatamente, lo que hoy, 3 años después, se pretende aprobar en una tarde.

Traigo esto a colación, precisamente, porque me parece que no podemos funcionar como institución de la República y de esta Provincia a la marcha del humor caldeado de ciertas situaciones de crisis; necesitamos sensatez, que es lo que faltó esencialmente en estos últimos diez días.

No creo que haya un solo legislador que no coincida con que el conflicto del transporte fue grave y que enfrentó a cordobeses con cordobeses; sin embargo, me parece que la responsabilidad, la ética ciudadana que tenemos que tener los que estamos aquí sentados, es no plantear falsas antinomias. No se trataba de trabajadores contra el resto de los trabajadores, era un problema profundamente social que tuvo responsabilidades compartidas. No quiero entrar al debate del conflicto en sí porque me parece que no tiene sentido, al menos no en esta oportunidad, además de poder hacerlo sensatamente porque creo que, precisamente, estamos todavía en un momento muy delicado en el que no se puede empezar a desparramar culpas.

Comparto la decisión de mi bloque de no acompañar esta ley, en primer lugar porque no sería sensato ni responsable acompañar una ley que no ha tenido posibilidad alguna de debate serio. En el debate del año 2014, Santiago Clavijo le decía a Unión por Córdoba que si había alguien que tenía jerarquizados abogados en materia de Derecho Laboral era el peronismo, sugiriéndole en aquel momento que los trajeran para escucharlos y luego discutir sobre el tema. Todos sabemos que en Derecho, como en la vida, puede haber distintas miradas, y hubiese sido muy importante que ya que habían generado esa comisión la hubiesen hecho funcionar. Así, quizás, mucho antes que hoy, hubiésemos tenido el problema resuelto porque se hubiera definido la diferencia entre servicios esenciales y servicios públicos, cuáles eran las medidas que se debían tomar, cómo se debía resolver la conflictividad social en estos términos, etcétera.

Pero estoy viendo que todo esto que se hace hoy es por y para la galería, cuando en realidad les importa poco el fondo de la cuestión. Tan poco, que están viendo desesperadamente cómo salen a decirle a la sociedad hoy, cuando el conflicto ya se resolvió, que están haciendo algo. Pero durante 10 días esta ciudad vivió una verdadera crisis que no vamos a resolver con esta ley, debido que esa crisis puntual ya se resolvió.

Las cuestiones de la competencia no son de mi incumbencia porque no soy una especialista en el tema, pero sí recuerdo que en el debate del año 2014, los propios legisladores que hoy no están porque han pasado una nota, se expresaron a través de las palabras del legislador Pihen. El legislador decía textualmente: “Con estos extremos que marca la coherencia verdadera –venía hablando de su posición como representante gremial– representamos a los gremios que prestamos los servicios esenciales y a los gremios que prestamos algunos servicios públicos que no son esenciales, y también a aquellos que en el imaginario popular, o en las encuestas televisivas, están seguramente en el ojo de la tormenta y que, normalmente, son los del transporte, que no son esenciales por las definiciones de la legislación nacional, que es la única que puede legislar sobre este tema”.

En ese contexto hubiese sido importante que convocáramos a esta Legislatura a muchos prestigiosos abogados laboristas y a constitucionalistas; para el caso, la semana pasada esta Legislatura homenajeó a muchos de ellos. Pero no, el camino que se toma es el más simple y fácil: sacar una ley para que la sociedad nos deje de putear por lo que pasó la semana pasada.

La otra cuestión que quiero dejar sentada es que las situaciones de violencia –me refiero a todo tipo de violencias, no solamente aquella que se desborda físicamente– no se resuelven con esta ley, sino que se resuelven con la actitud madura y responsable de los distintos actores sociales, pero centralmente de quienes tienen la responsabilidad de conducir los estamentos en sus distintos niveles de Gobierno.

Un filósofo de la era moderna dice que “la violencia es la hija malparida de la injusticia”. Quizá quienes tienen responsabilidad de gobierno deban pensar cuál es el rol que han jugado en esta resolución y cuál es el rol que juegan para generar entre los cordobeses

situaciones de violencia. No se resuelven con una ley sino con actitudes maduras, sensatas, responsables, pero básicamente se resuelven entendiendo que el hilo nunca, jamás se debe cortar por lo más delgado de una sociedad.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Tinti.

Sra. Tinti.- Señor presidente: hartazgo y saturación; los cordobeses quedamos saturados – para no usar la palabra “emputecidos”, y merezca un llamado de atención, aunque el término está en la RAE- por lo que vivimos en nuestra ciudad los últimos diez días.

Una vez más, nuestros derechos fueron pisoteados por los privilegios de unos pocos, porque parece que unos tienen privilegios y otros, como en una categoría inferior, tenemos derechos que, para colmo, están olvidados. Esto es lo que quedó demostrado en esta huelga salvaje. A todos los cordobeses indirecta o directamente nos afectó la huelga de los choferes de transporte.

No hace falta que nos bajen los tratados de Derecho Laboral o Derecho Constitucional, sabemos sobre la discusión, sobre la competencia federal o provincial, les aseguro que lo conocemos perfectamente.

Pero, parece que algunos no entienden que los derechos constitucionales de unos y otros son los mismos y están en la punta de la pirámide juntos, todos, y así se discutirá el tema en la Justicia también.

Pero en este momento tenemos que dar señales claras, contundentes, concretas y tajantes de que estos derechos constitucionales de unos no están por encima de los derechos constitucionales de los otros.

Se habló mucho de lo que la OIT declara sobre servicios esenciales. Es cierto lo que se ha dicho, pero se ha citado parcialmente, porque también ha dicho la OIT que el significado de servicios esenciales depende, en gran medida, de las condiciones propias de cada país y que un servicio no esencial puede convertirse en esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período, ya que un paro total y prolongado puede tener consecuencias graves para la población. Los pronunciamientos dependen de las situaciones particulares y de sus contextos, ha dicho.

Volviendo a los derechos de todos los ciudadanos, y frente a la confusión que quedó evidenciada en estos días, creo que se le debería aclarar a los choferes, por ejemplo, al momento de su ingreso junto con el examen de apto psicofísico, que no tienen privilegios, que tienen los mismos derechos que el resto de los cordobeses, de eso se trata.

Fueron diez días de parálisis total en esta Córdoba empobrecida, sin embargo, me pregunto si verdaderamente nos detenemos a pensar en dónde estamos parados con relación al bien común, teniendo en cuenta la falta de solidaridad que hay por parte de unos privilegiados con los otros derechos pisoteados.

Llamó poderosamente la atención la falta de solidaridad de una clase trabajadora –con buenos ingresos, podríamos decir– hacia otra población trabajadora más desprotegida y –de nuevo–, de eso se trata.

No es mi intención declarar culpables a unos e inocentes a otros, no me siento competente para hacerlo, pero sí me siento con la facultad de acompañar a un mecanismo legal para restablecer la equidad perdida.

Creemos que es fundamental establecer como servicio esencial el transporte urbano de pasajeros; los cordobeses estamos hartos de ser prisioneros de las pujas de poder, y este quizás sea o es un paso para lograr recuperar el equilibrio.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.

Sr. Quinteros.- Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer una consideración respecto a algo que escuché en las últimas horas. Cuando el Gobernador de la Provincia nos cita, en medio de este conflicto, a casa de Gobierno, nosotros asistimos porque, evidentemente, el grado de conflictividad social hacía que tuviéramos que asistir a una reunión en la que se convocaba al diálogo. Minutos antes, muchos dirigentes políticos, sociales, empresariales, y muchos trabajadores comunes, habíamos firmado un compromiso instando al diálogo y al mantenimiento de la paz social, con lo cual, evidentemente, íbamos a acompañar.

Pero, respecto de nuestra presencia en esos lugares, les pediría que no la interpreten, siempre, como una adhesión ciento por ciento a todo lo que plantean, porque si no, lamentablemente, nos va a ser muy difícil seguir concurriendo cuando nos inviten, porque nos encontramos con situaciones que, después, cuando se ven plasmadas en los escritos son distintas a las que se plantean, por lo que me parece que eso debería quedar absolutamente claro.

Nosotros vamos a estar cada vez que nos convoquen, los vamos a acompañar cada vez que haya una situación de conflicto social que amerite nuestra presencia, pero eso no significa que, a partir de ahí, podamos convalidar cada una de las decisiones que tome el Gobierno de Unión por Córdoba.

Dicho esto, y estando la Cámara constituida en comisión, el planteo que hacíamos ayer cuando llegó el texto de esta ley –porque recordemos que esto arrancó con una nota del Intendente Mestre, que nos pedía que instáramos a los legisladores nacionales a la modificación del artículo 24 de la Ley 25877, que creo que era el mecanismo idóneo, de hecho en esa reunión a la que hacía mención el diputado nacional Mestre lo planteó; se planteó que al día siguiente iban a intentar tener quórum legislativo a los efectos de tratar esta ley, cosa que no sucedió– que venía con algunos agregados –el título que se “tiró” esa mañana fue distinto a lo que se planteó–, era que solicitábamos, con un criterio prudente, serio, sensato, responsable, que este proyecto tuviera una preferencia de siete días, que tomara hoy estado parlamentario y que pudiéramos debatir en comisiones algunas cuestiones que, aunque soy abogado, tampoco nos quedan claras, y así sacarnos todas las dudas y venir con un despacho único para poder acompañar, en la medida que se hubiesen escuchado todas las voces y atendido a todas las partes intervinientes. Respecto a estas cuestiones que les acabo de plantear, y de la competencia o no de esta Legislatura para regular en esta materia, la biblioteca está dividida, hay algunos que tajantemente plantean que esto es competencia exclusiva de la Nación. Nosotros vamos en un marco regulatorio, en un marco legal de la propia Provincia de Córdoba, que viene a poner un paliativo o una solución, o una reacción –para decirlo con mejores términos–, a lo que fueron estos últimos diez días de caos y alteración, lisa y llana, de la paz social en la Ciudad de Córdoba, paz social a la que nosotros conocemos muy bien, el legislador Juez, cuando hizo uso de la palabra, probablemente tocó, elípticamente temas que a mí me gustaría profundizar un poco más. Muchos sostienen que esto va a ser una herramienta muy útil para que los sucesivos gobiernos provinciales y municipales puedan contar con instrumentos que hoy no tienen, a los fines de que los reclamos legítimos de los trabajadores no devengan en situaciones salvajes que tomen como prisioneros –no como rehenes– a todos los habitantes de la ciudad que, legítimamente, tienen derecho a trabajar.

No queremos que esto se convierta en una pelea entre trabajadores y usuarios, entre laburantes y laburantes; queremos dotar a la Provincia de Córdoba y a los municipios de las mejores herramientas para que se puedan garantizar el derecho de quienes quieren hacer huelga en el marco de la ley y el de quienes quieren acceder a los servicios mínimos esenciales, tal como lo marca este proyecto.

Encontrándose la Cámara constituida en estado de comisión, debo decir que en el artículo 2º se presentan aspectos que me hubiese gustado debatir y aclarar; por ejemplo, se refiere a los servicios relacionados a la protección ambiental, que hubiese sido conveniente que los definiéramos para que el artículo fuera más claro, ya que la sola expresión “servicios relacionados a la protección ambiental” es una generalidad que no debería existir en esta ley, que debiera ser mucho más concreta en esta materia.

El artículo 3º se refiere a la Comisión Técnica –y a la incorporación de actividades por su duración, por la extensión geográfica involucrada en la medida o por la afectación del servicio público–, que será la encargada de definir los alcances de esta ley.

Desde mi punto de vista –me hubiese gustado compartirlo en comisión con alguien que me pudiera ilustrar para saber si estoy equivocado–, cuando el proyecto se refiere a la Comisión –que está reglamentada; de hecho, la Ley 25.877 contempla esta Comisión en su articulado– no alude a que, por excepcionalidad, ésta pueda definir los servicios esenciales –al menos, así lo entiendo– sino que determina cuáles serán las prestaciones mínimas de servicios preestablecidos, definidos como “servicios esenciales”, cómo se acotarán y cuáles serán, en definitiva, los alcances que tendrán estos servicios, que se tendrán que producir bajo una medida de protesta.

En el artículo 6º, que se refiere al ámbito y funciones de la Comisión Técnica, me hubiese gustado que se empleara el término “deberán” en lugar de “podrán”, de modo que la solicitud elevada a aquellos organismos a los que se faculta en esta materia implique un requisito obligatorio, que debe ser un mecanismo ágil y no necesariamente un sistema burocrático que demore estas cuestiones, que está claro que siempre requieren de celeridad en el modo de resolución; de lo contrario, vamos a elaborar una herramienta condenada a terminar en la nada.

Por último, los artículos originalmente enumerados como 17 y 18 –creo que finalmente son 18 y 19; ha sido tan poco prolijo el tratamiento de esta ley que tuvimos que tomar nota cuando el legislador Julián López iba enumerando los cambios e ir tachando lo que no correspondía, y ni siquiera se nos entregó el texto definitivo– se refieren a la modificación al Código de Convivencia Ciudadana.

En tal sentido, creo que no debiera modificarse en treinta, cuarenta minutos o un día este Código, que costó cuatro años de tratamiento intensivo con muchísimos debates y que significó un avance respecto de lo que era el Código de Faltas, por lo que me parece que esto debiera haber quedado al margen de la discusión de este proyecto en particular y haberlo debatido luego, en el marco de la reforma del Código de Convivencia, y no hacerlo ahora porque, en verdad, costó mucho llegar a un entendimiento para poder aprobarlo. Si bien no era legislador, mis colegas que eran legisladores en aquel entonces lo saben. Por lo tanto, hubiese sido interesante tratarlo de otra manera y en otros términos.

Quiero aclarar a algunos legisladores que hicieron uso de la palabra al comienzo de la sesión que acá no hay ningún legislador –sinceramente lo digo– que tenga la intención o aliente los despidos masivos de choferes de la UTA y de ningún otro gremio que eventualmente pudiera convocar a una medida de fuerza. Por el contrario, lo que nosotros queremos es garantizar el derecho de los trabajadores y que puedan expresar sus reclamos a través de un paro o con la medida que crean necesaria pero que el resto de la sociedad no sea “prisionero” –insisto con la palabra– de huelgas que exceden la lógica y los límites racionales y, evidentemente, se paran en la ilegalidad.

Lo que sucedió en los últimos 10 días fue la ausencia del poder real del Estado para parar una situación que se veía venir y de la cual hay que hacerse responsable. Por ello, debemos garantizar a los cordobeses que no volverá a suceder de ahora en adelante y esperemos que esta herramienta sirva para ello.

Además, quiero dejar constancia del acompañamiento de la resolución por la que se insta a los legisladores nacionales a la incorporación, tal como estaba previsto en la Ley 25.877 del articulado que es de público conocimiento y que vamos a tratar luego de este proyecto de ley.

Como estamos en comisión, dejo abierta la sugerencia para que la podamos compatibilizar con los pedidos que acabamos de hacer.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).– Tiene la palabra el legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.– Señor presidente: he escuchado atentamente a quienes me precedieron en el uso de la palabra y se oponen al tratamiento de este proyecto. Puedo coincidir con respecto a la celeridad.

Creo que en esta nueva etapa del diálogo que ha elegido la República, tendrían que haber participado los gremios que siempre fueron la espada fundamental que el Gobierno de Unión por Córdoba, como los Gobiernos nacionales peronistas, han utilizado para hacer sentir sus derechos y sus reclamos cuando creían que habían sido violados.

Lo digo con franqueza, soporté los discursos de Peressini, de Salas, de Vilches. Pero también debo manifestar que no comparto en absoluto que Pihen, Vissani y Bustos no estén sentados acá, porque son los que discrepan y donde su voto tiene valor. Se ve que no lo quieren mostrar.

Cuando escuchaba decir que no se respeta el derecho de huelga, pensaba que si hay algo que la Unión Cívica Radical siempre ha respetado son los derechos. Pero, los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro.

¿Ustedes están seguros que los trabajadores, que los ciudadanos cordobeses pudieron hacerse ver a través de las instituciones? Mire, señor presidente, ¿quién levantó el paro?, me pregunté más de una vez. Hubo un dictamen del Ministro de Trabajo, hubo

decisiones de los que estaban a cargo del Ejecutivo y de los que estaban a cargo de la Municipalidad. Si se contestan esa pregunta se van a dar cuenta –como he escuchado muchas veces a los de la Izquierda- que fueron los mismos trabajadores los que levantaron el paro pasando por arriba de sus delegados.

Muchas veces he escuchado de parte de la Izquierda decir que los delegados no son los que los representan, hoy, después de estos nueve días quedó evidenciado que pasaron por sobre las decisiones de los delegados e hicieron lo que realmente querían, porque hay que respetar los derechos de los trabajadores, que son todos los que se escuchaban por las calles, a pie, que perdieron trabajo, salario y el presentismo.

Lo escuché atentamente al legislador García Elorrio que le tiró la responsabilidad al Intendente -también lo hizo con respecto al tema de la basura- y la pregunta que me hacía -porque ha habido muchas preguntas que hacerse debido a este paro que se armó estando en las calles y al cual adherían el SURRBaC, el SUOEM, el SEP- era por qué no se adhirió AOITA, que es el gremio de los choferes interurbanos, si uno quiere ver bajo el agua, se puede equivocar. Quien sepa la respuesta que me la diga, porque son los mismos choferes, de las mismas empresas y no se plegaron al paro decretado en Capital.

Cuando los dirigentes, los delegados -no la gente, no los trabajadores- vieron que la cosa aflojaba, porque los mismos trabajadores salieron a paliar el paro -quien me hace creer que si hubieran estado fuertes, porque la fortaleza de ellos está en los mismos trabajadores-, tuvieron que decir “amén”.

También el legislador García Elorrio dijo que hay problemas jurídicos y cuestiones nacionales y provinciales. Acá no estamos en Tribunales sino que pretendemos interpretar lo que quiere la gente y reflejarlo en un proyecto que, para algunos, puede ser equivocado.

Después de lo dicho, porque sentía la necesidad de hacerlo y para contestarle al legislador García Elorrio, me preguntaba ¿cuál es la responsabilidad de un intendente? Hacer la licitación pública, adjudicarla de acuerdo a la ley, poner en práctica el funcionamiento y cuando no cumpla los requisitos exigidos por el pliego, se deben aplicar las sanciones convenientes. ¿Le echarán la culpa de los despidos?, los despidos los va a hacer la empresa por la ilegalidad decretada por el Ministerio de Trabajo; la ley está, hay que cumplirla, tomará la decisión quien la tiene que tomar.

Quiero justificar en este hecho la posición del intendente de salir a defender este servicio público, porque lo hizo desde el punto de vista de la prevención. Ustedes como yo saben que su hermano es diputado nacional y presentó un proyecto en el Congreso nacional, que voy a pedir que se incorpore como parte de los fundamentos de mis dichos. Esa es la forma, prevenir.

Esperaron que la cosa llegara a una magnitud tal que sufrieran mucho los cordobeses.

Hablaron de la basura, que no tiene nada que ver con este tema, que lo tiran y lo vuelcan. En el 2012 el intendente quiso crear y creó el ESOP para prevenir que a los dos, tres, cuatro o cinco años no iba a haber lugar para poner la basura, y por eso se hizo. Pasaron dos o tres años que no se expropió, y hubo una serie de acontecimientos que no se dieron. Y no es que prohíba a los otros intendentes que no pongan la basura en el predio de la ciudad. Lamentablemente, no hay lugar, y en todo caso él tiene que tomar la decisión política de darles la solución a los que él gobierna. Si tuviera otras aspiraciones no se “tiraría” las 20 ó 30 municipalidades que hoy están diciendo o recriminándole esto.

Por otro lado, decía que muchos no comparten el tema de la celeridad. Si me tocara decir algo a título personal, habría que solicitarle la renuncia al Ministro de Trabajo por su incapacidad para manejar el tema, porque lo ridiculizaron ante el decreto de la conciliación obligatoria. Entonces, al caer en el ridículo, hay que separarlo, a mi humilde entender. Por supuesto, sabrá el que gobierna, el Gobernador Schiarette, la decisión que va a tomar, no tengo dudas. Está claro que la situación que vivió la ciudad de Córdoba durante los últimos días es el resultado y es lo que estamos tratando hoy.

El abuso del derecho se constituye en la lesión de los otros derechos para los ciudadanos que bajo el régimen democrático en el que vivimos, perjudica a un sector mayor o menor según el servicio que se presta. No podemos permitir –y a eso lo digo como fundamento de lo que estamos tratando- que servicios como la Salud, la Seguridad y el Transporte queden en manos de un grupo de gremialistas que dejaron a 400.000 usuarios sin trabajo, sin salud, sin educación, sin servicios, en definitiva. Ni una interna gremial, ni un intento desestabilizador de gremialistas con intenciones políticas pueden decidir que una

comunidad educativa se paralice, que el total de una población no pueda acudir a un hospital o que muchos trabajadores pusieran en riesgo su fuente de trabajo.

El presente proyecto no está afectando la libertad de huelga; es a favor de la libertad y el pleno goce de los otros derechos que también garantiza nuestra Constitución. El abuso del derecho desnaturaliza al propio derecho, lo conculca, lo desvirtúa, lo degrada y lo corrompe. ¿Será el apoyo de una ciudadanía a un reclamo justo? Comenzaron los delegados reclamando por las obras sociales, luego por las calles de Córdoba y, por último, por muchas cosas. Ya se padeció algo similar en la Provincia.

Con esto que he manifestado y solicitando la incorporación del proyecto como parte de mis fundamentos, solicito y adelanto el voto afirmativo al presente proyecto.

Muchísimas gracias.

-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR NICOLÁS-

Expediente Diputados: 0709-D-2014

INCORPORACION DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y LA SEGURIDAD COMO SERVICIOS ESENCIALES

ARTÍCULO 1º. Modifíquese el art. 24 de la Ley 25877, que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 24. - Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.

Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, el servicio público de transporte Público de pasajeros, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas; el control del tráfico aéreo y la seguridad de toda o parte de la población.

Una actividad no comprendida en el párrafo anterior deberá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial por una comisión independiente, integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y por los ministerios que se determinen en la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:

a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población.

b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL con la intervención del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, dictará la reglamentación del presente artículo dentro del plazo de NOVENTA (90) días, conforme los principios de la Organización Internacional del Trabajo".

ARTÍCULO 2º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS

Señor presidente: el presente proyecto pretende arrojar luz a uno de los temas más álgidos del Derecho Colectivo del Trabajo, esto es la confluencia de dos intereses jurídicos tutelados. A saber: Por un lado la necesidad de no interrumpir ciertas actividades consideradas indispensables por la sociedad, y por el otro, el respeto de un derecho fundamental de raigambre constitucional como lo es el derecho de huelga. Para ello, es de vital importancia delimitar el ejercicio de este último, el cual en manera alguna es absoluto e irrestricto, pues su ejercicio, en lo fundamental, no puede afectar otros derechos de parejo rango referidos a la preservación de la vida, la salud, la libertad, la educación y la cultura, protección del ambiente, el derecho al trabajo, etc.

En tal sentido, y dentro de este marco conceptual, es dable remarcar que las consecuencias de las huelgas en estos ámbitos trascienden el campo de la bilateralidad por el que discurren las relaciones trabajador - empleador extendiéndose a un tercero ajeno al conflicto, quien es el usuario del servicio, por lo que resulta necesario dar una solución a la problemática. Máxime, luego de las circunstancias de riesgo y peligro que abatieron a la población Argentina en el mes de Diciembre de 2013, que son de público y notorio conocimiento.

Por lo expuesto, interpreto que es necesario modificar la Ley 25877, en particular, el artículo 24 de su capítulo tercero sobre conflictos colectivos de trabajo.

Así, aludiendo a derechos de raigambre constitucional, es esencial mencionar la importancia del derecho a la huelga reconocido a los gremios en el párrafo segundo del Art. 14 bis de la Constitución Argentina. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea que el respeto por la libertad sindical es una exigencia "primordial e ineludible"; ya que sin dicha libertad se alteraría contra la posibilidad de existencia de mayor justicia social. "El comité [de Libertad Sindical] ha estimado siempre que el derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y de sus organizaciones únicamente en la medida que constituya un medio de defensa de sus derechos económicos" y el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones constituye uno de los medios esenciales de que disponen para promover y defender sus intereses profesionales (Recopilación de decisiones y principios de Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 1996, párrafos 473 y 475, respectivamente.)

Ahora bien, y como mencioné antes, dentro de la realidad social y política argentina, es un escenario habitual aquel donde, como mecanismo de fuerza, se priva a los ciudadanos de ciertos servicios esenciales. Según lo determinado por el artículo 24 de la Ley 25877 dichos servicios esenciales son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control del tráfico aéreo.

Concretamente, este instrumento legislativo que propongo, busca incorporar a dicho listado de servicios esenciales, "El Transporte público De Pasajeros y La Seguridad de parte o toda la población". Ambos servicios públicos son considerados imprescindibles en la vida cotidiana de los ciudadanos de nuestra Nación.

En la primera de las inclusiones, entendemos como Servicio Público de transporte de pasajeros, según los Decretos 656/94, 958/92 y 202/93, constituyendo aquellos que "tengan por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades comunitarias de carácter general en materia de transporte" urbano, suburbano, nacional e internacional (en esto último de conformidad con las modalidades operativas que los Estados Partes acuerden).

La posibilidad de contar con un vehículo no es igualitaria para todos los ciudadanos, sino lo contrario; y en ciudades con alta densidad poblacional el transporte público es una elección muy frecuente, ya que es esencial para su cotidianeidad, tanto para llegar al trabajo cada día como para poder movilizarse libremente. Hay incluso quienes indican que la plaza automotriz puede aumentar por la ineficiencia y aleatoriedad del estado del transporte público, dificultando aún más la movilidad dentro de las grandes ciudades. En tal sentido, en la actualidad, en las grandes urbes, la confluencia de circunstancias como el caos del tránsito, la seguridad del peatón, y la polución que genera en el medioambiente, ha llevado a la clase gobernante a implementar mecanismos alternativos de transporte, o a optimizar el ya existente, conjuntamente con un desaliento en el uso del automóvil particular.

Son tantos y tan conocidos los ejemplos de situaciones en las que el paro del transporte ha dificultando e incluso impedido que cientos de ciudadanos desarrollen su vida con normalidad que no resulta necesario su descripción.

En nuestro País, la Ciudad de Córdoba ha resultado pionera, al incluir al tópico en cuestión en su nuevo "Marco Regulatorio Para El Servicio De Transporte Urbano De Pasajeros". La Ordenanza Municipal Nro. 12076 establece en su Art. 43º.- El Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) que se presta en la ciudad de Córdoba es definido como esencial y de alta prioridad y su prestación debe ser continua y obligatoria bajo responsabilidad conjunta o individual de todos los actores.--- Art. 44º.- Los servicios troncales, deberán prestarse como Servicios Esenciales y de Alta Prioridad, no pudiendo ser alcanzados por medidas de fuerza ni reducir su frecuencia por debajo del treinta por ciento

(30%). Las Concesionarias proponen anualmente a la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito (AMTT) los diagramas de servicios esenciales y alta prioridad para su aprobación, la que establece los parámetros de prestación mínimos y los comunica a los prestadores. El Municipio, con los Concesionarios y los trabajadores del sistema, acuerda el alcance y cumplimiento de las guardias mínimas.

Tomando casos internacionales, cabe mencionar a Brasil, donde el artículo 9º de su Constitución garantiza a los trabajadores el derecho de huelga, delegando en el Poder Legislativo la determinación de las actividades esenciales y la regulación de las "necesidades inaplazables de la comunidad". Asimismo, el art. 10º de la ley 7.783 contiene un amplio, pero taxativo, listado de las actividades esenciales: "tratamiento y abastecimiento de agua; producción y distribución de energía eléctrica, gas y combustible; asistencia médica y hospitalaria; distribución y comercialización de medicamentos y alimentos; servicios funerarios; transporte colectivo; captación y tratamiento de aguas servidas y basura; telecomunicaciones; guarda, uso y control de sustancias radioactivas, equipamientos y material nuclear; procesamiento de datos ligados a servicios esenciales; control de tráfico aéreo; compensación bancaria". Y en idéntico sentido, el art. 11 de la normativa señalada se exige tanto a los sindicatos como a los empleadores y a los trabajadores, que de común acuerdo garanticen los servicios indispensables para atender las necesidades que, no siendo atendidas, coloquen en peligro inminente la supervivencia, salud o seguridad de la población. En su defecto, conforme al art. 12, serán garantizados por el poder público.

En cuanto a Colombia, se aborda la temática del transporte público en la Ley 336 de 1996, artículo 1º, "La presente tiene por objeto unificar los principios y los criterios que servirán de fundamento para la regulación y reglamentación del transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y su operación en el territorio nacional, de conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las normas que la modifiquen o sustituyan.- Artículo 5º: "el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo".

Es de vital comprensión la premisa fáctica de donde parte la necesidad de incluir al servicio público de pasajeros dentro de la nomina de servicios esenciales en sentido estricto, toda vez que la realidad así lo exige. Resulta clave entender que la magnitud de los acontecimientos que sirven de antecedente al presente proyecto radica en la cantidad de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público como única alternativa de movilidad y que ante situaciones de huelgas se ven sistemáticamente afectados.

De este modo, reiteramos que podríamos seguir enumerando incontables casos donde por diversas circunstancias, en su mayoría totalmente comprensibles, el transporte ha sido parado, dejando como víctimas a los millones de usuarios diarios, que requieren de tal servicio para un normal desenvolvimiento de su cotidianeidad.

En idéntico sentido, en el mes de marzo del año 2010 la Comisión de Garantías establecida en la Ley 25877, haciendo uso de sus facultades y reconociendo la clara importancia que la problemática expuesta tiene para la población en su totalidad, estableció transitoriamente al transporte público como servicio esencial. Este proyecto, intenta dar un paso más, pugnando concretamente para que el servicio público de pasajeros pierda esa naturaleza impuesta de transitoriedad e integre la nómina taxativa que prevé la normativa del rito.

Por otra parte, entendemos a la seguridad pública, como el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país. Estas acciones, por su parte, en nuestra República están condicionadas por otro concepto con raigambre constitucional, "La Libertad", establecido en el Art. 19 de nuestra Constitución Nacional. La que consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tienen otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley.

En cuanto a la aplicación concreta de esos límites, es el Estado quien ostenta el monopolio, con arreglo a la ley, para lo cual posee dos mecanismos esenciales para llevarlo adelante, los poderes públicos y las fuerzas policiales.

Y es justamente en este último medio "fuerzas policiales" donde pretendo hacer el enfoque, a los efectos de poder incluirlo también dentro de la nómina de servicios esenciales con carácter restrictivo.

Para ello recurriré al derecho comparado a los fines de alentar dicha inclusión. Y si bien no pretendemos llegar al extremo de eliminar derechos reconocidos constitucionalmente, es clave citar algunos ejemplos a los efectos de plasmar la importancia que le dan otros Estados a la situación de indefensión en que la población incurre al carecer de dicho servicios esenciales.

Así conforme surge del Art 98 de la Constitución del Paraguay: "Todos los trabajadores de los sectores públicos y privados tienen el derecho a recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses...", con exclusión expresa de "los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación" y "de las policiales". El mismo artículo determina que "La ley regulará el ejercicio de estos derechos, de tal manera que no afecten servicios públicos imprescindibles para la comunidad." El precepto constitucional transcrito se encuentra reglamentado en el Título Cuarto del Código del Trabajo (CT), promulgado por la ley n° 213 de 1993, modificada por ley n° 496 de 1995. El art. 357, CT, define a la huelga como "la suspensión temporal, colectiva y concertada del trabajo, por iniciativa de los trabajadores para la defensa directa y exclusiva de sus intereses profesionales"; y el art. 360 del mismo Código reglamenta el modo en que puede ser ejercido este derecho, al establecer que "consistirá en la cesación de servicios de los trabajadores afectados, sin ocupación por los mismos de los centros de trabajo, o de cualquiera de sus dependencias." Reproduciendo la terminología constitucional, la legislación paraguaya toma el concepto de "servicios públicos imprescindibles" para recortar el ejercicio del derecho de huelga. El art. 361, CT, prescribe que: "Los trabajadores en los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, como ser suministro de agua, energía eléctrica y hospitales, deberán asegurar, en caso de huelga, el suministro esencial para la población. Los hospitales deberán mantener activos los servicios de primeros auxilios y todo servicio necesario para no poner en peligro la vida de las personas." La jurisprudencia ha sostenido que este principio "debe compatibilizarse también con la noción de 'servicio mínimo', que en términos generales, define la cuota de servicio o actividad que debe mantenerse en toda circunstancia". El art. 369, CT, complementa la restricción al ejercicio de la huelga en estas actividades, ordenando que el "Sindicato, o en su defecto el Comité de Huelga, garantizará la prestación de los servicios esenciales a que se refiere la Constitución Nacional...". El art. 367, CT, limita la huelga también en protección de "aquellas labores cuya suspensión perjudique gravemente la reanudación de los establecimientos y talleres". No obstante, en su segundo párrafo, deja en cabeza de los huelguistas la prevención del número de trabajadores indispensables a tal fin. El mismo art. 367, CT, en resguardo de la eficacia residual de la huelga, prohíbe la contratación de trabajadores sustitutos de los huelguistas.

Idéntico tratamiento al tema de análisis realiza Chile, quien en el art. 19.16 de su Constitución impide el ejercicio del derecho de huelga a los trabajadores "que atiendan Servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, la Economía del país, el abastecimiento de la población o la seguridad nacional".

La regulación restrictiva se desarrolla en la normativa legal. El Código del Trabajo regula el derecho de huelga en general y, en particular, el procedimiento a seguir en los casos de excepciones o exclusiones a la citada garantía constitucional.

De esta normativa, surgen tres grupos de exclusiones: 1) Trabajadores a los que no les resultan aplicables las normas del Código, entre los que se encuentran: los funcionarios de la Administración estatal, los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, los funcionarios de los Poderes Legislativo y Judicial, los trabajadores de empresas dependientes del Ministerio de Defensa, los empleados de empresas del Estado cuyos regímenes específicos lo prohíban, los trabajadores de empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, dentro de los dos últimos ejercicios hayan sido financiados en más de un 50% por el Estado en forma directa o a través de impuestos, los trabajadores de empresas prestadoras de servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional; 2) Actividades excluidas del régimen de negociación colectiva: los trabajadores sujetos a contratos de aprendizaje y los contratados exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena transitoria o de temporada; los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados, que se encuentren dotados de facultades generales de administración; las

personas autorizadas para contratar o despedir trabajadores (haciendo constar la prohibición en sus respectivos contratos de trabajo); los trabajadores que ejerzan cargos superiores o de mando o inspección en las empresas, siempre que se encuentren investidos de atribuciones decisorias sobre políticas y procesos productivos o de comercialización; y, por último, 3) Casos especiales de trabajadores que, pese a reconocérseles el derecho a negociar colectivamente, carecen de la prerrogativa de la huelga (art. 384, Código cit.). Las limitaciones, a su vez, consisten en dos tipos de exigencias: 1) la del mantenimiento de un equipo de emergencia en los servicios esenciales o para la prevención de daños irreparables a bienes de la empresa; y 2) la de reanudación de las faenas en el caso de ciertas huelgas que afectan a servicios esenciales. De acuerdo con el art. 380 del Código del Trabajo, toda vez que se realice una huelga en una empresa, predio o establecimiento, cuya paralización provoque un daño actual e irreparable en sus bienes materiales o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial de salud, o que preste servicios esenciales, el sindicato o grupo negociador está obligado a proporcionar el personal indispensable para la ejecución de las operaciones cuya paralización pueda causar ese daño. La enumeración de los servicios esenciales se concreta en el mes de julio de cada año por resolución conjunta de los Ministros de Trabajo, de Defensa y de Economía.

En nuestro ordenamiento jurídico, y estrictamente en relación a la huelga ejercida por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, el Comité de libertad sindical relativizó la posibilidad de su inclusión o exclusión de la aplicación del Convenio nº 87 de la OIT, sobre la libertad sindical, atendiendo a que en virtud del texto del artículo 9.1 de dicho Convenio, "no cabe duda de que la Conferencia Internacional del Trabajo tuvo intención de dejar que cada Estado juzgue en qué medida considera oportuno acordar a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía los derechos previstos en el Convenio, o sea, implícitamente, que los Estados que hubieren ratificado el Convenio no están obligados a reconocer los derechos mencionados a esas categorías de personas." Asimismo, precisó que: "Los miembros de las fuerzas armadas que podrían ser excluidos de la aplicación del Convenio núm. 87 deberían ser definidos de manera restrictiva". Si en lugar de los "miembros" de estas fuerzas, se trata de su personal civil, éste se encuentra comprendido dentro de los convenios que tutelan el derecho de Sindicalización y de libertad sindical, al igual que los demás trabajadores del sector Público y con las consecuencias señaladas para estos "empleados-no funcionarios", como surge también de la propia jurisprudencia del Comité: "Los trabajadores civiles de los establecimientos manufactureros de las fuerzas armadas deben tener el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, de conformidad con el Convenio nº 87".

Los hechos trágicos acaecidos en nuestra República Argentina en Diciembre del año 2013, originados por la retención de servicios realizados por la policía de la Provincia de Córdoba con motivo de un reclamo salarial, motivó la sistemática violación de derechos constitucionales de la población entre los días 3 y 4 del mes citado, multiplicándose como una enfermedad contagiosa en casi todas las provincias de la nación.

Aún sin estar agrupados sindicalmente, la acción de huelga fue llevada adelante. Quien pretenda afirmar lo contrario, acreditaría su carácter de mero leguleyo ajeno absolutamente a la realidad de los hechos.

Los medios del mundo se hicieron eco de la horrorosa situación descrita con motivo de esta huelga policial, que conllevó la muerte de ciudadanos y que irremediablemente cambió para siempre la sensación de aparente seguridad que la población de la nación sentía hasta ese momento.

Si bien, reiteramos, no es intención del proponente la eliminación del derecho de huelga a los trabajadores que se encuentren comprendidos en las fuerzas armadas, ni a aquellos que realicen labores dentro de las fuerzas policiales, sí es objetivo del presente proyecto la incorporación de los mismos a la nómina taxativa de servicios esenciales previstos en la ley 25877. Logrando de dicho modo garantizar un régimen de prestaciones mínimas reguladas en la normativa del rito, que mantendría el equilibrio en el goce de las libertades involucradas, todas reconocidas por ley. Pero, y sobre todo, evitando daños irreversibles y que no guarden proporción con los intereses profesionales de las partes en el conflicto, así como, principalmente de no causar daños a terceros, es decir, en este caso, la población en general que sufren directamente las consecuencias de la carencia de seguridad.

Por todo lo expresado anteriormente es que solicitó a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto de ley.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Somoza.

Sr. Somoza.- Señor presidente: personalmente, entiendo que tratar leyes de esta magnitud en una situación en la cual el humor social y distintos actores políticos están en conflicto, no es lo óptimo, partiendo de la base que los trabajadores de UTA no acataron las reglas que establece el marco legislativo vigente, no acataron la conciliación obligatoria y, sin dudas, tuvieron prisioneros a los ciudadanos de Córdoba –como ya repitieron algunos legisladores.

En el séptimo día de paro, con muy bien tino y criterio, por iniciativa de la legisladora El Sukaria, un grupo de legisladores, junto con el COMIPAZ, decidimos reunirnos para decir: “aquí estamos”, para levantar la voz en función de garantizar la paz social y, en este marco, nos convocó el Gobernador –a gran parte de la dirigencia política de esta Provincia- planteando la alternativa de un marco legislativo nuevo que eran las garantías –de las que los legisladores preopinantes, con muy buen criterio hablaron- de los ciudadanos, que sin dudas no van a estar contrapuestas con los derechos de los trabajadores. Pero no podemos negar que la realidad es que los distintos trabajadores de la ciudad de Córdoba no han tenido la posibilidad de tener su medio de transporte habitual –el económico-, entendamos que son las clases más vulnerables de la sociedad.

Escuché un montón de argumentos que son falaces cuando se plantea esta falsa dicotomía entre trabajadores ricos y pobres, entonces coincidimos en que era necesaria una herramienta para garantizar los derechos constitucionales de esos vecinos, pero, a mi humilde entender, y con un gran sentido de oportunismo –no de oportunidad- se reflota un proyecto que no se animaron a sacar en el año 2014, después del conflicto con la Policía, en función de la resistencia de los gremios y de la discusión acerca de si se incorporaban los servicios de educación o no; y en un conflicto donde el protagonista era la policía y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, Unión por Córdoba no se animó a poner lo que había que poner sobre la mesa para avanzar en un proyecto de este tipo.

Hoy, aprovechando que el conflicto no se centra en una discusión entre la UTA y el Gobierno de la Provincia, sino con un intendente municipal, cuando el lunes, el Gobernador convocó a todas las fuerzas políticas, nos pidió resistencia y no hacer marcha atrás porque había que resolver el conflicto poniendo las cosas donde tenían que estar, Unión por Córdoba se abusa, se monta oportunamente sobre esto y nos manda este proyecto de ley que no tiene nada que ver con lo que se trató en el “panal” el día lunes, en presencia de todas las fuerzas políticas: diputados y senadores nacionales, intendentes, el Grupo de los Seis, el COMIPAZ y todos los legisladores.

El lunes hablamos de garantizar la paz social, de instruir a los senadores nacionales para que nos dieran un marco legislativo en la modificación de la Ley 25877, para que los intendentes –y quienes tienen responsabilidad funcional- tuvieran algún tipo de defensa ante esta situación en la cual los vecinos que representan estaban siendo afectados por intereses minoritarios –y no hay que tener miedo a decirlo-, como son este grupo de trabajadores de la UTA que violó absolutamente todas y cada una de las leyes no acatando la conciliación obligatoria, no acatando la resolución de la UTA nacional, etcétera.

Ahora, en este marco, con apuro -como siempre-, yo entendí el apuro el día lunes porque estaba la potencialidad de poner en peligro la paz social, y con la buena voluntad de las distintas fuerzas políticas que entendimos que en algunos casos tenemos que despojarnos de los colores partidarios y ver la solución común, que es indispensable, nos aparece este proyecto que -como decía recién-, desde mi humilde entender, no representa la solución a esta problemática.

El lunes se habló de servicios básicos esenciales y hablamos de salud, seguridad, energía, gas, agua, y del debate necesario en función de esto –de que el transporte público sea considerado un servicio esencial, porque vulneraba estos derechos que hemos repetido incansablemente-, pero no les alcanzó y agregaron la protección ambiental, amplio concepto que por ahí uno puede entender que tiene nombre y apellido y a mí no me gustan las leyes con nombre y apellido, me gustan las leyes que marcan un camino y las pautas para que toda la sociedad en su conjunto pueda ser el beneficiaria, y no les alcanzó.

En el artículo 3º se habla de que la comisión técnica, teniendo en cuenta todos estos planteos, en forma excepcional podrá calificar las actividades involucradas por dichas

acciones como servicio con garantía de prestación mínima; la ampliamos más y no les alcanzó.

Y hablamos en el artículo 4º de una comisión técnica con mínimas precisiones de cómo va a ser conformada, lo único que dice es que los miembros no podrán ser dependientes de ningún poder del Estado, y no les alcanzó.

Y en el artículo 7º, concatenado con los artículos 8º, 9º y 10, exigimos a los trabajadores un preaviso de cinco días ante una medida, una vez cumplida la conciliación obligatoria, y le quitamos, a lo mejor, a esos trabajadores la posibilidad de reaccionar ante un conflicto que sea inminente o que no tenga la posibilidad de dar cinco días para anunciar una medida.

Nos parece mucho nueve días de paro, sin duda, señor presidente; cinco días de preaviso cuando también puede llegar a ser que el momento político o el momento social haya cambiado, y no les alcanzó.

-Ocupa la presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

En el artículo 11 planteamos el trámite para la calificación de excepcional de estas necesidades, de estas garantías mínimas que plantea el artículo 1º, y esto me da a pensar que como no confío en quienes ejecutan las leyes en esta Provincia ni en quienes hace 18 años manejan el Gobierno provincial, y tengo mis serias diferencias, y esto es lo bueno de la política, que las podemos tener, que tenemos distintas formas de ver la cosa pública o la administración pública, de cómo se administran los recursos de los cordobeses, que tenemos distintas formas de pararnos cuando tenemos vecinos en la calle que están reclamando por una medida, que cuando nos conviene nos montamos sobre esos vecinos y cuando no nos conviene -como en el caso de la Ley de Bosques- ignoramos a 20.000 conciudadanos cordobeses en la calle manifestándose en contra.

Cuando no era legislador todavía tuve posiciones enfrentadas y difíciles y he discutido con los miembros de mi bloque del Frente Cívico respecto de algunas situaciones que tuvieron que votar y se evaluaron las cuestiones de equilibrio, las presiones y la oportunidad; sentado allá me era mucho más sencillo decir "se equivocaron en lo que votaron", y hoy creo que es una oportunidad más. Hay biblioteca para los dos lados, no soy constitucionalista ni abogado, no voy a objetar si esta ley es viable o no en función del si vulnera los derechos del trabajador y no es nuestra facultad sino del Gobierno nacional, pero tengo que hacer lo que reclamé a los legisladores de mi partido en distintas oportunidades, que era votar en función de las convicciones.

Hoy, lamentablemente, tengo que confesar que entiendo y sufro en carne propia lo que son las presiones de la política; sin dudas, todos los políticos tenemos una balancita en la cual ponemos los argumentos para un lado y para el otro, y cuando vos en esa "balancita" tomás una decisión en función del lado que crees que más pesa, si tenías razón tendrás un costo, y si estabas equivocado tendrás un rédito.

En este caso, tengo que adelantar que personalmente pido disculpas a los miembros de mi bloque del Frente Cívico por toda la discusión que hemos tenido en este cortito tiempo que, sin duda, hubiera sido mucho mejor poderlo discutirlo en comisiones, evaluar la constitucionalidad y ver cómo a cada uno de estos puntos le dábamos el marco para que esa ley que el lunes, reunidas todas las fuerzas políticas de Córdoba y en función de dar respuestas a los cordobeses ante un conflicto, pudiéramos haber encontrado el punto en común.

Esta no es una ley contra el conflicto de la UTA, es una ley mucho más genérica y amplia, es un proyecto que realmente es muy discutible y, en función de eso -insisto, pido disculpas- el trabajo que encaramos en mi bloque, artículo por artículo, la discusión que tuvimos y, lamentablemente, pido disculpas porque hoy asumo pagar el costo interno que tenga que pagar, y pagar el costo que seguramente tendré que pagar ante los cordobeses que están en la calle diciendo que esta herramienta puede llegar a ser válida para resolver un conflicto como este de la UTA, que los cordobeses lo vivieron en carne propia y están hipersensibilizados, pero con la responsabilidad que habiéndome costado muchos años ocupar esta banca, lamentablemente, decidiendo pagar este costo político, tengo que adelantar mi voto negativo a esta iniciativa.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Señor presidente: ya se dijo mucho pero, claramente, estamos ante la presencia de un proyecto de ley que, eventualmente, si el concierto de la política de los bloques mayoritarios hubiera hecho un diagnóstico jurídico, como responsabilidad propia de uno de los poderes del Estado, hubieran advertido que debía ser un proyecto de declaración, más nunca se puede hacer un proyecto de ley que intente reglar o reglamentar el derecho constitucional previsto en el artículo 14 bis, que le da la competencia exclusiva y excluyente al Congreso de la Nación, por el artículo 75, inciso 12) de la Constitución nacional, y los tratados internacionales con rango constitucional.

No podemos, legisladora Tinti, no hacer un diagnóstico de las jerarquías constitucionales y ponerlas en armonía, es una obligación, no solamente del que tiene conocimiento del derecho; no se puede en ningún recinto parlamentario sancionar leyes que nacen nulas, incurrimos en una gran irresponsabilidad, no solamente política sino jurídica.

Le estamos tirando al Poder Judicial la responsabilidad de interpretar un galimatías jurídico que intenta dar solución o respuesta a las incompetencias de los gobiernos. Esa es la realidad, intentan modificar el acuerdo federal, que tiene que ver con la preexistencia de las provincias y municipios frente a la construcción de un gobierno republicano y federal.

No es posible que hagan una interpretación de que en la reglamentación del derecho a huelga existen facultades concurrentes, no lo son. Lean el fallo del año pasado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo Orellano contra el Estado argentino; léanlo, porque al miembro informante no lo escuché decir que está reñido con ese fallo, con ese temperamento del Ministerio máximo de Justicia de la República Argentina.

¿Cómo puede ser que, a partir de un conflicto -como tuvo muchos la Provincia de Córdoba-, intenten generar un dispositivo para reglar los futuros conflictos? Porque, evidentemente, la lectura política del contexto histórico hace que ustedes mismos prevean que vamos a vivir en una sociedad conflictiva, porque vienen avasallándose los derechos, y no solamente los derechos de los trabajadores formales, porque acá parecería ser que estamos discutiendo derechos de los trabajadores formales, también de los trabajadores desocupados cuando vayan a pedir por comida, por trabajo, por abrigo porque hay un invierno tremendo.

Hace mucho que no veo que un bloque vote contra los intereses de sus propios votantes, a quienes ustedes representan. Ustedes saben muy bien de lo que les hablo: están votando en contra de los intereses de quienes ustedes representan, porque al hablar de los derechos de los trabajadores es que vimos que hay una historia, no solamente hablamos sobre un conflicto particular, sino sobre todos los conflictos, de las huelgas históricas de la República Argentina, y no solamente de la huelga, porque esto no restringe solamente el derecho a huelga sino que restringe el derecho a la protesta social, y el derecho a la protesta social no solamente lo llevan adelante las centrales, sus trabajadores o gremios en particular.

El artículo 1º, en donde establecen garantías mínimas, es un artículo que se excede en la competencia de un Gobierno provincial. Y, señor presidente, lo que llama la atención es por qué no echaron mano a la comisión independiente que determina el artículo 24 de la Ley Nacional 25.877. ¿Por qué no echaron mano a eso? No podemos resolver con leyes inconstitucionales las incompetencias de los gobiernos. Si se les fue de las manos el conflicto, no es posible que echemos mano a leyes desprestigian a la Legislatura, sancionando una ley que va a dar vergüenza al pueblo cordobés porque genera una expectativa frustrada a la gente. ¿O ustedes creen que el Poder Judicial de Córdoba, después de la cantidad de jurisprudencia que existe, va a permitir que una jurisdicción del país se arrogue reglar el derecho a huelga, que ni siquiera la dictadura del '57, derogando la Constitución de 1949 del General Juan Domingo Perón, se animó a tocar el artículo 14 bis?

¿Pero cómo es posible? Y leo el diario y veo que dicen que debe quedar claro que, como peronistas, tenemos absoluta responsabilidad para sostener el derecho a huelga.

Señor presidente, no estamos hablando de que acá se va a cercenar definitivamente un derecho constitucional; estamos hablando de que no nos podemos arrogar una jurisdicción que no nos corresponde. Va a generar un precedente a nivel nacional, en donde cada provincia, cada municipio va a querer reglar sobre las leyes de fondo, y esto es un argumento jurídico de peso, esto no es una cuestión política que se intenta diseñar solamente para dar respuesta a una sociedad angustiada. Esa sociedad angustiada y la situación de excesos que vivimos es por la incompetencia de los gobiernos, y no es posible

que vengan a traer aquí leyes que tiene que resolver antes el Congreso de la Nación, si es que quieren modificar ese artículo 24.

-Asume la Presidencia el Presidente Provisorio,
legislador Oscar Félix González.

Legislador Nicolás: no está aquí el legislador Pihen, pero me voy a arrojar, con la responsabilidad que eso implica, el derecho a hacer más las palabras del legislador Pihen cuando dice: “Una vez más el Gobierno provincial pretende mostrarse como garante de la paz social, enviando a la Legislatura un proyecto que intenta reglamentar el derecho constitucional de huelga. Repite lo que ya intentó sin éxito en el 2014, también entonces como secuela de un conflicto de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba. Esta evidente maniobra de aprovechamiento político tardío vuelve a incurrir en los mismos vicios que el proyecto fallido del año 2014. No lo digo yo, lo dice el legislador Pihen: 1) Invade un ámbito que, como un derecho establecido en la Constitución nacional, sólo puede ser abordado por el Congreso Nacional; 2) Se arroga el derecho de determinar cuáles son los servicios esenciales, desconociendo que tal determinación deviene de los convenios de la OIT suscriptos por nuestro país; 3) Desconoce, incluso, la propia legislación provincial vigente que establece institutos, como el arbitraje voluntario, como herramienta para superar conflictos; 4) Sugestivamente, el proyecto va en línea con el intento del Gobierno nacional de incluir al transporte como servicio esencial, intento que al día de la fecha ha fracasado al no conseguir el quórum en el Congreso de la Nación. 5) Disimula o esconde la responsabilidad del intendente municipal, principal responsable del conflicto y del servicio público de transporte, que también sugestivamente ya anunció el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de ordenanza en el mismo sentido.

Y cierra, al igual que en el año 2014, “la CGT regional repudia este proyecto, y se movilizará en contra del mismo, instruyendo a sus legisladores de extracción gremial para que no participen en la sesión en que se trate el proyecto y dejen constancia por escrito de su posición de rechazo”, y advierte que, aunque el proyecto se apruebe, de ninguna forma logrará que los trabajadores dejen de ejercer en plenitud el derecho constitucional de huelga. Córdoba, 13 de junio de 2017. José Pihen. Secretario General de la CGT.

Asimismo, la otra CGT Rodríguez Peña, también ha manifestado lo propio, y en igual sentido, un montón de trabajadores.

Deseo agregar que no solamente este proyecto va a limitar los derechos de los trabajadores, sino que también va a hacer lo propio con el derecho de organizaciones civiles, de Derechos Humanos, el derecho que tiene la CoDeBoNa a seguir peleando por una Ley de Bosques, que realmente contemple los estándares de la ley nacional.

Están reviviendo el Decreto 2184, de Carlos Saúl Menem, en el peor momento de la historia del neoliberalismo argentino que, como no pudo sacar por ley, se lo terminó ampliando, y hasta los jardines de infantes terminaban siendo servicios esenciales.

Nos estamos equivocando porque existe un sistema jurídico y un estado de derecho y, además, porque ya existen las leyes para quienes las vulneren, y un sistema jurídico para que persiga, sancione e investigue a quienes cometen infracciones contra las leyes preexistentes.

¿Qué se quiere inventar con esta nueva ley? Es una ley de contexto, oportunista, que se cae en dos días, y además con la gravedad de que intenta generar una reglamentación de la Ley nacional. En tal sentido, tomé nota de lo que dijo el miembro informante del bloque oficialista. Pero ¿con qué facultades esta Legislatura puede reglamentar una ley, creando una comisión igual a la que está en el orden nacional? ¿Qué es esto? Es parte también de ese cordobesismo. ¿No hablaban sobre que ustedes son peronistas republicanos? Esto va en contra de la república, del concepto más esencial de república.

Ustedes les dicen a los trabajadores que están fuera de la ley, pero diseñan una ley que va en contra de los tratados internacionales y de la Constitución de la Nación. ¡Ustedes están fuera de la ley! ¡Estudien la Constitución!, estudien las leyes si quieren resolver los problemas de conflictividad social, porque nunca he visto a un gremio que reclame por recomposición salarial cuando tiene salarios dignos; jamás he escuchado semejante torpeza.

Seguramente, cuando se cierre el debate nos dirán: progresistas, Izquierda retrasada, cualquier cosa; pero, ¿saben qué?, nosotros no nos olvidamos de nuestros orígenes. Mi viejo, junto a Norberto Centeno, fue uno de los correlatores de la Ley de Contrato de Trabajo.

Ellos lucharon años y dieron la vida por las conquistas de los trabajadores, pero se ve que algunos de ustedes se olvidaron de esas luchas históricas que dio el peronismo para lograr que esa ley siga vigente, luchas históricas que dio el peronismo durante años y años. Y ahora vienen con esta barbaridad que echa por tierra la memoria del “negro” Atilio López y de tantos otros compañeros peronistas que hoy aparecen, con dolor y con mucha tristeza, cuando muchos de ustedes, peronistas, vienen a votar una ley que va en contra de los intereses de la clase popular, de los sectores que lo único que pueden hacer es manifestarse y hacerse escuchar.

Siempre termina igual: nos acusan, nos dicen: “ustedes, que piensan en los sectores populares, son de Izquierda”. ¡Háganlo! Si defender los derechos de los trabajadores, si defender los derechos de la gente, si defender los derechos de una república y de una democracia es ser de Izquierda, pues entonces soy de Izquierda. Pero ustedes dejen de hablar de peronismo y bajen los cuadros del “negro” Atilio López que tienen repartidos por todos lados.

Lógicamente, anuncio el voto negativo a los proyectos 22216, 22223 y 22247.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- El legislador Capitani había solicitado la palabra pero no está.

– Ingresa al recinto el legislador Capitani.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Capitani.

Sr. Capitani.- Gracias, señor presidente.

Me había adelantado el secretario que faltaban dos oradores más.

En los argumentos que el Gobernador envió a esta Legislatura para el tratamiento de este proyecto, hace referencia al artículo 144, inciso 3), de la Constitución provincial, referido a su posibilidad de enviar iniciativas a este Cuerpo. Debería haber agregado el inciso 15) de la Constitución, que expresa que puede adoptar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público de la Provincia de Córdoba.

Adelanto que la posición de nuestro bloque es acompañar la figura jurídica que hoy tratamos, compartiendo muchos de los argumentos que aquí se expresaron como, por ejemplo, los de las legisladoras Marcela Tinti y Elisa Caffaratti.

Creo que esta legislación no enfrenta a trabajadores contra trabajadores; ni siquiera propicia la pelea entre ellos ni con la comunidad en general, que se ha visto afectada en estos casi 10 días de huelga escandalosa que impidió el desarrollo de una enorme ciudad, afectando no sólo el transporte público local sino el desarrollo de las actividades de la comunidad en general.

Establecer garantías de funcionamiento mínimo para el sistema de transporte local no es de ningún modo ir en contra del derecho de huelga establecido en las legislaciones correspondientes.

Nos parece que no sólo se dejó presos o rehenes de una huelga durante tantos días a los ciudadanos comunes, a los laburantes, estudiantes y comerciantes que utilizan el servicio público de pasajeros, sino que se vio entorpecido y afectado todo el movimiento de una ciudad. Este conflicto gremial que aparentemente –imaginamos- va en camino a una solución, como bien decía el legislador Nicolás, producto de los propios trabajadores de ese servicio público, pero también es cierto que funcionaron los resortes del Estado municipal, el que ofreció todas y cada una de las herramientas para resolver las dificultades de esta huelga de tantos días.

Se fueron los legisladores que inician sus palabras siempre con la letra “i”; dejaron su mensaje, se sacaron las fotos y se fueron a la marcha; son los legisladores de la inconstitucionalidad, de la ilegalidad, de la interpelación, términos con los que siempre se exceden y abusan en aplicar en nombre de los trabajadores para fundamentar sus discusiones en este recinto. Vomitan con palabras un montón de mentiras y pretender hacerle creer a la comunidad que son los dueños de las razones: eso es mentira. Estos legisladores ni siquiera tienen la representatividad de cara a la sociedad, de forma contundente; la expresión minoritaria en este recinto, definitivamente habla de ello.

Reflexionar sobre los distintos temas en relación a la ley nacional y a la discusión de normas provinciales, es pretender entrar en una discusión que no quiere dar solución a una cuestión de fondo.

Señor presidente: entendemos que esta legislación establece, definitivamente, las garantías de un funcionamiento mínimo en el servicio del transporte público, que no sólo necesita y requiere la Ciudad de Córdoba, sino que está previsto por todos y cada uno de los intendentes de todo el territorio provincial. Intendentes de todas las expresiones políticas nos instaban, desde la Comisión de Labor Parlamentaria, a elevar la discusión no sólo en el marco del Congreso de la Nación, sino también a acompañar de manera categórica este proyecto que envía hoy el Poder Ejecutivo Provincial con la intención de regular el servicio y guardias mínimas de los servicios esenciales.

Pero también son estos legisladores, los de la "I", que son consecuentes con su irracionalidad permanente y continúa, en forma lapidaria dan este mensaje negativo a la sociedad.

Es cierto, la enorme mayoría de este interbloque ha decidido no sólo acompañar una iniciativa de estas características, que es polémica, que seguramente trae debates y discusión pública. Pero aquí estamos para decirle sí a la enorme necesidad que tiene la ciudad y también la Provincia de Córdoba de establecer estas garantías necesarias en el marco de este servicio como es el del transporte.

Sin entrar en mayores calificativos para quienes de una forma denigrante tratan al debate en el ámbito parlamentario, queremos manifestar nuestra firme decisión de acompañar la ley en el marco del orden y la paz que necesita la ciudad de Córdoba, e instar al señor intendente a que siga peleando por el bienestar de cada uno de sus habitantes.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Arduh.

Sr. Arduh.- Señor presidente: escuché casi a todos los que expusieron, y hay cosas que uno aguanta y hay otras que no.

Que el legislador Peressini nos trate de canallas, caraduras, o que la legisladora Vilches nos trate de cínicos cuando los cínicos fueron ellos cuando difundieron imágenes con noticias viejas sembrando el caos y el pánico en la gente, eso es cinismo. Son sectores políticos con una irresponsabilidad total; son poco serios. Escuchar al legislador Salas defendiendo al usuario, ¡mentira! No defienden al usuario, se defienden ellos con actos en la UTA, esa es la única posibilidad que tiene este tipo de partidos políticos. Para ellos los partidos políticos no existen porque son lo más antidemocrático que hay.

La sociedad cordobesa quiere atención, comprensión, palabras que, seguramente, estos partidos políticos no conocen; como el diálogo, concordia, consenso. No saben absolutamente nada de esas palabras. Es una lástima que se hayan ido, siempre tiran la piedra y esconden la mano. En el marco de la legalidad y el respeto institucional, lógicamente, ellos no tienen ni la más remota idea.

Con respecto a cómo nos trataron y lo que nos dijo la gente de la Izquierda, hay que dejar de pensar en la avivada y pensar más en la gente.

En cuanto al legislador García Elorrio, en un momento habló e insinuó algún tipo de –llamémosle- negociado o bolsas. Me parece que es de una bajeza política importante lo del legislador García Elorrio, porque insinuar negociados con tanta irresponsabilidad, e instalar este tipo de conductas que puedan llegar a tener algunos de los gobernantes, es muy irresponsable.

Le quiero decir que hacía 30 años que no se licitaba el transporte de la ciudad de Córdoba, hacía 30 años que a nadie le interesaba venir a Córdoba. ¿Por qué? Porque no les convenía. Ahora, cuando se hizo la licitación –que fue dentro de la ley, el 30 de abril de 2013– esas empresas que hoy están –Autobuses Santa Fe, que tenía 69 líneas de empresas propias, 8 líneas con la UTE, nada más y nada menos, que en la Ciudad de Santa Fe, Carlos Paz, Ushuaia, Resistencia, Neuquén, Caleta Olivia y en el Gran Buenos Aires, lo mismo pasaba con ERSA, que estaba en Resistencia, Corrientes, Santiago del Estero y en Santa Fe– ya estaban en el 2013, y después la misma ERSA se fue a la Provincia de Córdoba, donde ganó licitaciones con los interurbanos. ¿Esa es la bolsa de la que habla el legislador García Elorrio? Sinceramente, me gustaría que el legislador se hubiera dedicado, más que todo, a discutir las soluciones de los problemas de los cordobeses y no a fijarse en lo que se

fija porque, en verdad, yo no me fijo de dónde saca el legislador García Elorrio para poner unos carteles de bastante envergadura en la Ciudad de Córdoba.

Respecto al tema de la ley que estamos tratando, sinceramente, no nos hacen falta demasiados argumentos para defender este proyecto, pero sí le quiero decir que celebro – en lo personal– la iniciativa de Unión por Córdoba apostando a la sana convivencia democrática y la paz social ante la necesidad del correcto funcionamiento de los servicios públicos. Con esto, lógicamente, vamos a permitir el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de todos los cordobeses.

Con respecto a los sindicatos: les diría que necesitamos sindicatos que representen en serio a los trabajadores, necesitamos sindicatos que luchen por los derechos individuales y también por los colectivos. Es por eso que en nuestro apoyo al proyecto no están en debate sólo las cuestiones de servicios o las laborales, está en debate el respeto por la pluralidad y la convivencia democrática, está en debate la clase de sociedad que realmente queremos.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: antes de hacer algunas consideraciones inevitables respecto de los dichos de varios legisladores, quiero decir, una vez más –agradeciendo el aporte magnífico que nos han dado los legisladores García Elorrio y Fresneda en materia de Derecho Constitucional–, que se olvidan que las Provincias conservamos el derecho de legislar sobre los procedimientos, y esta ley es una ley que regula el procedimiento de un derecho que está consagrado en la Constitución.

Por lo tanto, nosotros no vamos a acudir a frases altisonantes, aunque, en verdad, por allí el ánimo de muchos de nuestros compañeros es que lo interpretarían mucho mejor si lo hiciera.

Pero en democracia, a los que aprendimos, después de muchos sacrificios –esos sacrificios que acá se mencionan y se enarbolan como bandera–, nos parece que algunos no quieren que se proyecten a la construcción de la democracia futura. Aprendimos el valor de la tolerancia, como siempre dice nuestro Gobernador, y es lo que estamos haciendo declarando que este proyecto para nada es inconstitucional, pero también declarando, a través de esta tolerancia, que pueden decir muchas cosas, pero lo que no pueden, no logran ni van a lograr, es que el pueblo de Córdoba no tenga ya una opinión absolutamente formada respecto de este conflicto.

Si hay algo, señor presidente, que ha quedado claro –por encima de tantas otras cosas, como el tema de las responsabilidades, etcétera, que seguramente las discutiremos en el futuro– es que el transporte es un servicio esencial. Lo han demostrado todas y cada una de las consecuencias que han sufrido los distintos sectores de nuestro pueblo, que son precisamente los que encuentran en el “bondi” la herramienta para ir a trabajar, incluso los que no cuentan como otros –que en buena hora la tienen– con una sindicalización y salen a “changuear” sin tener manera de traer el producido de la changa a la mesa familiar. A esto se suman muchas otras consecuencias que aquí se han mencionado.

En el año 2004, a instancias del entonces Presidente Kirchner, se sancionó la Ley 25.877. En varias intervenciones de este debate se ha hecho referencia al artículo 24 de esta ley, pero no se ha leído lo que este artículo expresa. Para no aburrirlos, simplemente les pido a muchos legisladores –incluso a los que nos mandan a estudiar la Constitución– que lo lean porque –palabra más, palabra menos– expresa lo que estamos votando hoy.

¿Por qué habrá sido que el entonces Presidente Kirchner tuvo que sancionar la Ley 25.877, cuyo articulado contiene una réplica de lo que hoy estamos votando?, ¿habrá sido porque la conflictividad era “cero”?, ¿habrá sido porque una visión progresista e integradora de los movimientos sociales le impedía ver lo que significaba la latencia y el posible desarrollo de conflictos que no estuvieran debidamente organizados en el marco de la ley? Todo era consecuencia –sí, claro– de la crisis de 2001, pero seguramente, por entonces, el kirchnerismo votó esta ley precisamente por razones mucho más preocupantes –sin pretender con esto restarle ni un ápice a la gravedad de lo que hemos vivido los cordobeses– que por entonces se vivían.

A aquella ley la votaron, y resulta que hoy, que hay que votar en Córdoba esta ley –que, en definitiva, se condensa en el artículo 24–, no la apoyan. ¿Por qué no lo hacen?

Sencillamente, porque, más allá de las lecciones de Derecho Constitucional, priorizan el tema de la campaña y sus intereses políticos que, si bien son legítimos –como los de cualquiera de las otras fuerzas aquí representadas–, son absolutamente mezquinos.

Antes de venir a darnos lecciones sobre cómo debemos descolgar los cuadros de los que han sido parte de la pelea, de la lucha sin cuartel que el peronismo a la cabeza y los trabajadores del pueblo argentino dieron para grabar en letras de molde en la Constitución nacional el derecho de huelga; antes de venir a decirnos que tenemos que desempolvar la memoria, que nos expliquen por qué algún sindicato –que tiene identificación política e, incluso, cuenta con un miembro de ese bloque– sigue la misma metodología –hace “seguidismo”– que los movimientos y fuerzas de izquierda, que ya sabemos hasta el hartazgo lo que persiguen y cómo quieren lograrlo.

En definitiva, cuando votamos esta ley, dignificamos y nos sacamos el sombrero una vez a lo que nosotros mismos hemos sido parte en su construcción: el movimiento obrero organizado de nuestro país, que va a seguir siendo la columna vertebral de nuestro Movimiento Nacional Justicialista, le guste a quien le guste.

Cuando decimos que esta ley, precisamente, es la que mejor resguarda la institucionalidad sindical, es porque estamos absolutamente convencidos –y el conflicto lo evidenció una vez más– de que la anarquización de los procesos de lucha, la anarquización de los procesos llevados adelante por aquellos del “mientras peor, mejor”, por aquellos pequeños burgueses de “café con crema” que todavía no pudieron hacer el duelo del paraíso en la tierra y, como no lo pueden lograr, apelan permanentemente a la diatriba y a la violencia. A nosotros no nos van a venir a dar lecciones de las que nosotros también en nuestra historia fuimos parte, como SITRAC-SITRAM y tantas otras experiencias.

El clasismo convertido en propuesta sindical lleva a esto: al perjuicio de los propios supuestos representados, en este caso en el conflicto del transporte, porque son conflictos diseñados por una estrategia que tiene puerta de ingreso pero que no tiene puerta de salida. La puerta de salida es, precisamente, sólo para aquellos que, seguramente, nunca tomaron un “bondi” o lo tomaron muy pocas veces en sus vidas; no para los trabajadores.

Este sindicalismo que nosotros pretendemos seguir manteniendo es el que, precisamente, encuentra en este resguardo constitucional del derecho de huelga todos los procedimientos legales que se tienen que seguir. Y en esta ley, señor presidente, ni siquiera utilizando una figura geométrica, son paralelos, porque el derecho de huelga está absolutamente garantizado, porque el procedimiento que estamos aprobando con esta ley recién empalma con cualquier tipo de conflicto que se lleve adelante en el punto donde éste entre a tener las características que tuvo esta huelga salvaje en Córdoba.

No vulnera absolutamente nada. Es mentira, señor presidente. Si algunos dicen –como ya lo han dicho– que nosotros queremos enfrentar trabajadores contra trabajadores, no somos nosotros los impulsores, y quienes vamos a votar este proyecto somos los que, precisamente, propiciamos esa diferencia. Vayamos a la calle y les preguntemos a todos esos miles y miles de cordobeses que se quedaron todos estos días sin poder ir a trabajar, sin poder cumplir con sus obligaciones, sin el acceso a la salud, etcétera.

Entonces, este seguidismo que hace el SURRBaC de este planteo, absolutamente irresponsable ya en términos históricos, que permanentemente hace la Izquierda en los conflictos de todo tipo, seguramente tendrán que explicar a los demás trabajadores y a sus propios representados a qué obedece.

¿No será que obedece a la necesidad de dirimir alguna interna sindical? Malpensados que somos y ya estamos todos calificados de tantas cosas que, una más..., malpensados, como tal vez tenemos el derecho a serlo después de todas las expresiones y de las conductas; ¿no será que se buscaba reunir y sindicalizar a estos delegados en el conflicto de UTA? No lo sabemos.

Pero sí está claro que quienes quieren darnos lecciones tienen que empezar por instruir a su jefa política que no abandone el peronismo, como lo está haciendo Cristina Kirchner en la Provincia de Buenos Aires. Nosotros aquí seguimos siendo peronistas y seremos los defensores número uno del derecho a huelga y de los trabajadores.

Según nos dice el legislador García Elorrio “siempre falta tiempo”, “si hubiésemos tenido una semana más”, “si hubiésemos podido estudiar un poco más esto”, uno lo escucha y por momentos tiene la tendencia a ceder a lo que parecen ser consejos de una maestra de escuela; pero no nos equivocamos legislador, porque al debate lo hizo la sociedad en estos últimos diez días de zozobra, allí estuvo el debate y debiera haber estado usted –se lo digo a

través suyo, señor presidente- para escuchar y sacar conclusiones, más allá de todas las clases magistrales que nos quiera dar. Él pide “paciencia” porque no tiene ninguna responsabilidad de gobernar nada, nos dice que “si hubiésemos tenido más tiempo para estudiar”, otros legisladores incluso dicen que podríamos haber tomado una decisión el lunes, otros dicen -porqué no- que se las hubiese arreglado el intendente de Córdoba ya que era un conflicto que le atañía y le atañe. Con respecto al legislador García Elorrio, cuando llega el punto donde la realidad manda es como decirle “Aurelio, pero vos querés que nosotros entremos a la jaula donde hay que domar al león”, “Ah no, pero ese no es un problema mío, a eso se tienen que dedicar ustedes, muchachos, yo no tengo esa responsabilidad”, a esto es a lo que le llaman debate serio.

Cuando el Gobernador Schiaretti tomó la decisión de convocar a la mayoría de las fuerzas políticas, a todo el arco social, a los diputados y senadores nacionales, planteó la necesidad de que debíamos no solamente avanzar con esta ley, además, no es cierto que el Gobernador haya dicho respecto de esta ley en la reunión del lunes algo distinto a lo que hoy se plasma, como no sean las modificaciones formales que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales ha hecho.

Pero la decisión que aquí se ha requerido, la de hablar con el presidente, con los diputados y senadores nacionales y con todas las fuerzas sociales y políticas, no tuvo precisamente una especulación electoral, por eso dijo el Gobernador muy claramente y con un dicho popular: “me importa un rábano si tenemos o no elecciones”. Acá había que restaurar el principio de autoridad. Cuando las cosas salen de los caminos de la ley, la restauración del principio de autoridad es fundamental para mantener la democracia, la paz social y la vida de todos los cordobeses, en este caso. Eso fue lo que hizo el Gobernador.

Esto es, en definitiva, lo que nos trae hasta hoy con consecuencias positivas de ese debate y es que mayoritariamente vamos a votar esta ley que no va a vulnerar el derecho de huelga, y respecto a todos estos pronósticos apocalípticos que se han hecho aquí veremos, realmente, cómo no se van a cumplir en el futuro.

Por lo tanto, solicito el cierre del debate, que la votación se realice en forma nominal, porque lo que aquí varios legisladores han manifestado nosotros lo apoyamos, y no se puede venir a la Legislatura e, incluso, a la comisión de Labor Parlamentaria, a pedir hablar en primer término, en la obligación que tienen que cumplir aquí, porque tienen que irse a la marcha.

Que le quede claro al pueblo de Córdoba, que muchas veces nos piden la fundamentación del voto nominal, lo solicitamos desde el bloque de Unión por Córdoba y pedimos el acompañamiento del resto de los legisladores, para que les quede claro a cada cordobés cómo actúa cada uno en momentos en que se reinan la zozobra y la intranquilidad de la gente, y se juega la paz social.

Repito, pido el cierre del debate, se ponga a votación el despacho que consta en Secretaría, adelantando el voto positivo de mi bloque,

Nada más.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador Gutiérrez de cierre del debate.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

En consecuencia, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho producido por la Cámara constituida en comisión.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado. Queda levantado el estado de Cámara en comisión.

-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- A continuación, en consideración la moción del legislador Gutiérrez de voto nominal.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

A continuación, se pone en consideración en general, de manera nominal, de acuerdo a la posición del miembro informante, legislador Julián López.

Por Secretaría se tomará la votación nominal.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

-Votan por la afirmativa los legisladores: Arduh, Brarda, Buttarelli, Caffaratti, Calvo, Campana, Capdevila, Capitani, Carrara, Caserio, Ceballos, Chiappello, Ciprian, Cuassolo, Cuello, Cuenca, Díaz, El Sukaria, Gustavo Eslava, Emilia Eslava, Farina, Ferrando, Gazzoni, Gigena, González, Gutiérrez, Iturria, Juez, Kyshakevych, Labat, Lino, Isaac López, Julián López, Majul, Manzanares, Massare, Mercado, Miranda, Nicolás, Oviedo, Palloni, Papa, Passerini, Pratto, Presas, Quinteros, Rins, Roldán, Romero, Saieg, Salvi, Scarlatto, Serafín, Tinti, Trigo, Vagni y Viola.

-Votan por la negativa los legisladores Bedano, Fresneda, Montero y Somoza.

-Al emitir su voto, dice el:

Sr. García Elorrio.- No siendo facultad de esta Legislatura, mi voto es no positivo.

Sr. Presidente (González).- El resultado es afirmativo por 57 votos a favor, cinco votos en contra y ocho legisladores ausentes.

Queda aprobado en general.

Tiene la palabra el legislador Quinteros.

Sr. Quinteros.- Señor presidente: durante el debate, estando la Cámara constituida en comisión, solicité algunas modificaciones, específicamente a cinco artículos, de los cuales cuatro eran los que me parecían más trascendentes, con lo cual quiero consignar mi voto negativo a los artículos 3º, 11, 18 y 19.

Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo a los artículos 3º, 11, 18 y 19.

Tiene la palabra el legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Señor presidente: solamente para aclarar y recordarle, más allá que hay legisladores que han justificado su ausencia, tanto los legisladores Saillen como Nebreda claramente dijeron que votaban de manera negativa este proyecto de ley.

Si ustedes quieren no consignarlo,,,

Sr. Presidente (González).- Legislador Fresneda no vamos a continuar con este tema solamente votan los legisladores presentes, el voto a distancia no tiene lugar en el reglamento. (Aplausos).

A los efectos de la votación en particular lo haremos por artículos.

-Se votan y aprueban los artículos 1º al 19.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 20 de forma, queda aprobado en proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 84 del Orden del Día, proyecto 21679.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: tal como se acordó en la Comisión de Labor Parlamentaria, si el legislador Passerini, presidente de la Comisión de Salud me entregaba la respuesta antes del debate, el proyecto era bajado; y el legislador Passerini me entregó, conforme a lo que se había comprometido, la respuesta.

Sr. Presidente (González).- ¿Queda en comisión o está proponiendo el archivo legislador?

Sr. García Elorrio.- Solicito archivarlo, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración el archivo del proyecto 21679.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría, se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Nota oficial 22241/N/17.

Proyectos de declaración 22221 al 22223, 22228 al 22230, 22232 al 22238, 22243, 22245 al 22249.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, se da tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el temario concertado que obra en cada banca, con la redacción acordada en Labor Parlamentaria, cuyos números son: 22147, 22181, 22184, 22185, 22186, 22190, 22191, 22192, 22193, 22194, 22196, 22197, 22199, 22200, 22201, 22203, 22204, 22205, 22207, 22209, 22210, 22211, 22212; 22214 y 22245/L/17 (compatibilizados); 22219, 22220; 22223, 22247 y 22249/L/17 (compatibilizados – Resolución); 22228, 22229, 22230, 22232, 22233, 22234, 22235, 22236, 22237, 22238, 22243, 22246 y 22248/L/17.

En consideración la aprobación de los proyectos.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.

Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: disculpe, porque no sé si ya se trató esto.

Quiero dejar sentado mi voto negativo a la solicitud de prórroga de licencia de los legisladores Fortuna y Bee Sellares, en tanto vengo sosteniendo históricamente esta posición en relación a que una vez que pasaron los seis meses reglamentarios no estoy de acuerdo con que se sigan tomando licencia de la representación popular.

Nada más.

-Ocupa la presidencia, el Vicepresidente, legislador Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora.

Simplemente, para informar que el tema fue tratado al inicio de la sesión. De todas maneras, queda determinada y certificada su posición.

Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.

Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que quede constancia del voto negativo del interbloque Cambiemos a los proyectos 22214 y 22245.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 22221/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 13 de junio de 2017.

Al Sr. Presidente
De la honorable Legislatura provincial
Martín Miguel Llaryora
S. / D.

De mi mayor consideración:

En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del presente proyecto de resolución 22221/L/17, por el que se declara preocupación ante las irregularidades ocurridas en el marco del proceso de revocatoria popular iniciado contra el señor Intendente de Villa Tulumba y solicitando a los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia, garanticen el proceso electoral convocado para el día 25 de junio.

Sin otro particular, lo saludo a Ud. muy atentamente.

Carlos Ciprian
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Ciprian.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Ciprian.

Sr. Ciprian.- Señor presidente: hago uso de la palabra en nombre de los representantes electos y en funciones de la localidad de Tulumba, que ven en el accionar de algunas instituciones una gravedad sin antecedentes.

El intendente electo y en funciones de la localidad de Tulumba, Romualdo Palomeque, asumió el 10 de diciembre de 2015 y, tras la asunción, abandonó el cargo. Desde entonces, ha solicitado ininterrumpidamente licencias; esto escapa a la lógica de la acefalía provisoria, violando el artículo 13 de la Constitución de la Provincia, que prohíbe la delegación de funciones.

Este hecho y algunos más, hicieron que ciudadanos actuaran de acuerdo a los resortes institucionales que nuestra Constitución de la Provincia consagra.

El día 13 de enero del año 2017, la comisión promotora de la revocatoria hace la presentación de la misma, cumpliendo todos los requisitos que la ley exige; una vez iniciado el proceso, el juez de paz que presidía la Junta Electoral pide licencia reemplazándolo el juez de paz de Santa Cruz.

A partir de allí, hubo una sucesión ininterrumpida de licencias y renunciaciones en la Junta Electoral municipal; a su vez, cartas documentos de la comisión promotora a los fines de darle continuidad al proceso, hasta que finalmente el 26 de mayo próximo pasado, la Junta Electoral municipal establece el 25 de junio del corriente año como fecha para la revocatoria. Inmediatamente, el juez de paz y presidente de la Junta en ese momento, pide licencia por carpeta psiquiátrica hasta el día 26 de junio -un día después de la revocatoria que había fijado.

Señor presidente: la revocatoria popular es un instrumento que nuestra Constitución ofrece a todos los ciudadanos cordobeses y los puntos que este proceso demanda han sido debidamente cumplimentados por la comisión promotora.

Hoy, a diez días del proceso, la incertidumbre es el común denominador de muchos ciudadanos de Tulumba. Ruego a usted, señor presidente, que esta Casa de las leyes, junto al Poder Ejecutivo provincial y la Justicia de la Provincia aseguren el escrutinio para que los habitantes de Tulumba puedan expresarse.

Hace apenas seis días, esta Casa de las leyes homenajeó a los convencionales constituyentes del '87, algunos de ellos ya no están. El mejor homenaje que les podemos rendir es que la letra escrita en los doscientos artículos de nuestra Constitución se cumpla, que las garantías individuales y los procesos que hacen al equilibrio de los poderes del Estado provincial se cumplan.

No cercenemos los derechos que nuestros convencionales constituyentes plasmaron en la Carta Magna.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración formulada.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado por Secretaría el proyecto 22222/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Córdoba, 13 de junio de 2017.

Sr. Presidente
Poder Legislativo
Martín Miguel Llaryora
S. / D.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 22222/L/17, declarando preocupación por la situación de Carlos "peca" Soriano, quien lleva 16 días de huelga de hambre, denunciando la realidad de la APROSS y reclamando respuesta por parte del Estado provincial.

Al mismo tiempo, instando a las autoridades de la APROSS y al Gobierno de la Provincia a agotar todas las instancias para dar respuesta al doctor Soriano y, fundamentalmente, a preservar la salud y la vida del mismo.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Martín Fresneda
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Martín Fresneda.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

Para formular una moción de reconsideración tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.

Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.

En este mismo momento hay una importante cantidad de ciudadanos de Córdoba que están frente a la sede de la APROSS acompañando el día 17 de huelga de hambre de un queridísimo ciudadano y médico de esta Provincia. No es casual que el conjunto de los bloques que integran Cambiemos como quienes firmamos el proyecto de declaración, manifestemos la preocupación por la situación que éste está atravesando.

Desde el primer día hicimos innumerables gestiones para encontrar algún grado de racionalidad en la conducción de la APROSS, y fue absolutamente imposible, pero además de imposible, mire, pocas veces he advertido de parte de algunos funcionarios la indolencia, la indolencia frente al otro.

Pocas veces asistí al desconocimiento que las autoridades de la APROSS tienen respecto de una figura que además es pública en nuestra Provincia. Nadie desconoce, y mucho menos esta Legislatura, que tuvo al doctor Soriano como uno de los más importantes artífices de la Ley de Muerte Digna, un catedrático, un científico, un comprometido con el otro.

Lamentamos profundamente que a 17 días de huelga de hambre, en donde está en riesgo su vida, que también estuvo en riesgo por las operaciones que pasó y por las que está reclamando hoy se le reintegre, lamentamos profundamente la inacción ya no de la APROSS sino también del Poder Ejecutivo de la Provincia, frente a quien también hicimos numerosas gestiones.

Hay una prestigiosísima psicoanalista argentina, una de las teóricas más importantes que ha dado el psicoanálisis argentino, que hizo una clarísima lectura de las cuestiones sociales. Silvia Bleichmar decía que la crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre el otro, sino que es también la indiferencia frente al sufrimiento del otro.

Realmente, lo que el Gobierno de Córdoba está mostrando, además de tantas otras cosas, es un grado de crueldad inusitado, insostenible porque, además, ya no es solamente frente a la problemática del doctor Soriano sino frente a la de cientos de pacientes que durante todos estos días hemos escuchado en la puerta de la APROSS padecer, porque al frente hay un contador que está más preocupado por los números que por la salud pública de los afiliados.

La verdad es que es una vergüenza lo que está pasando en la APROSS y merecerá también pedidos de informes en relación al tema.

Por esas razones, y porque nos parece que esta Legislatura no puede mirar para otro lado cuando hace 17 días que una persona está en huelga de hambre, es que solicitábamos simplemente que manifestáramos la preocupación, a ver si alguien le puede tocar la puerta en serio al poder político de la Provincia.

Por estas razones es que pido la reconsideración del tratamiento.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Montero.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

Para todos los legisladores que tienen el privilegio de ser papás, para el domingo les deseamos, de parte de la Legislatura, feliz Día del Padre. (Aplausos).

No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Marcela Tinti a arriar Bandera Nacional del mástil del recinto.

-Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 17 y 25.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos